Capítulo 6

ARGENTINA, 1930-1946

El año 1930 abre la puerta que da paso a la Argentina moderna. El golpe militar de septiembre de 1930 provocó el derrumbamiento del gobierno constitucional y dio comienzo a la larga serie de democracias débiles, interrumpidas por gopes de estado y dictaduras militares, que fue el rasgo cardinal de la política argentina hasta bien entrado el decenio de 1980. La caída en la depresión en 1930 cambió de manera permanente el camino del desarrollo económico. Hasta entonces Argentina había subsistido como dependencia extraoficial de Gran Bretaña, a la que abastecía de carne y cereales a la vez que era el principal mercado del carbón y las manufacturas británicas y, al menos hasta 1914, las exportaciones de capital de la misma procedencia. A partir de 1930 la estructura victoriana, que ya soportaba una presión creciente desde el estallido de la primera guerra mundial, empezó a tambalearse. La depresión causó un descenso de las exportaciones agrarias y una expansión de las manufacturas, lo cual perjudicó la estabilidad de la relación anglo-argentina al transformar los componentes de la economía argentina. De modo paralelo a los cambios económicos tuvo lugar un cambio social de igual magnitud y con las mismas consecuencias duraderas. La población argentina aumentó de 11,8 millones en 1930 a 15,3 millones en 1946, pero la tasa de crecimiento descendió. La disminución de las tasas de crecimiento fue consecuencia de un descenso considerable de la tasa de natalidad, de 31,5 por mil en 1920 a 24,7 por mil en 1935, por culpa, según la gente de la época, de la depresión. (En cambio, las tasas de mortalidad sólo descendieron ligeramente, de 14,7 por mil en 1920 a 12,5 por mil en 1935.) La disminución del crecimiento demográfico se debió también al fin de la inmigración en masa de europeos. Los hombres nacidos en el extranjero todavía representaban el 40 por ciento de la población masculina en 1930, pero sólo el 26 por ciento en 1946. Ya no eran inmigrantes españoles e italianos sino inmigrantes internos quienes alimentaban la expansión continua de Buenos Aires al acelerarse en gran medida la migración del campo y las provincias durante los decenios de 1930 y 1940.

En el año 1930 también se registró una aceleración de un profundo cambio ideológico —la decadencia del liberalismo y la ascensión del nacionalismo— que más adelante daría color en la textura de la política argentina. Las primeras señales de una conciencia nacionalista aparecieron antes de 1930 entre algunos sectores de la intelectualidad. Pero después de 1930 el nacionalismo se convirtió en un movimiento político que complementaba e intensificaba los otros cambios que tenían lugar en el gobierno y las instituciones,

la economía y la sociedad y formaba parte de un proceso de cambios complejos que se reforzaban mutuamente. En el decenio de 1930 los ecos del pasado se mezclaban con los precursores del futuro. En septiembre de 1930 cayó la «democracia» y volvió la «oligarquía», que al principio se sostuvo por medio del ejército y luego, durante un decenio o más, del fraude electoral. La reaparición de la oligarquía conservadora en el decenio de 1930 significó una regresión al sistema político que había predominado antes de la reforma electoral de 1912 y la victoria de los radicales en 1916, toda vez que los sucesivos gobiernos excluyeron de las actividades políticas a gran parte de la población que tenía derecho a participar en ellas. Pero, como en 1900-1912, en el decenio de 1930 se produjo una lenta liberalización, y a principios de 1940, bajo el presidente Roberto María Ortiz, la política parecía a punto de entrar de nuevo en la fase democrática que empezó en 1912. Otros aspectos del decenio de 1930 también recordaban el pasado. En el centro de la política económica conservadora durante la depresión estuvo el tratado Roca-Runciman de 1933, que fue un intento de proteger los históricos vínculos comerciales y financieros con Gran Bretaña que la oligarquía del siglo XIX había creado. En otros sentidos, sin embargo, las respuestas conservadoras a la depresión pronto se extendieron en direcciones innovadoras. Empezando por el Banco Central en 1935, se fundaron nuevas instituciones cuyo cometido sería dirigir la economía, al tiempo que palabras y expresiones como «devaluación», «control de cambios» y «financiación mediante déficit» entraron en el léxico de los encargados de formular la política económica, donde han permanecido desde entonces.

El régimen conservador hizo frente a la depresión con notable éxito. La recuperación empezó ya en 1934, y a finales del decenio Argentina había recobrado la prosperidad de los años veinte. Sin embargo, el período de dominio de la oligarquía fue más breve que el de los radicales que lo había precedido (1916-1930), puesto que en los primeros años cuarenta aparecieron nuevas fuerzas políticas que lo desbancaron rápidamente. El derrumbamiento del conservadurismo en junio de 1943, a raíz de un segundo golpe militar, fue en parte resultado de la segunda guerra mundial, que después de 1939 provocó una crisis de las relaciones internacionales y la política económica. A mediados de 1940, mientras la Alemania nazi invadía Francia y Bélgica, los intentos conservadores de revitalizar los antiguos vínculos con Europa terminaron en un súbito fracaso. Ante la rápida caída del comercio exterior, los líderes conservadores hicieron esfuerzos vigorosos por crear una relación nueva pero esencialmente parecida con Estados Unidos. Sin embargo, al negociar un tratado con Estados Unidos en 1940-1941 Argentina no logró alcanzar su objetivo principal: la apertura del mercado norteamericano a sus exportaciones de carne y cereales.

Las circunstancias internas también condicionaron fuertemente el cambio político. Después de 1940 el sector rural experimentó un cambio importante al pasar de la agricultura a la ganadería, dado que el ganado bovino y los cerdos ocuparon gran parte de la tierra donde los arrendatarios cultivaban antes sus cosechas y los peones estacionales recolectaban los cereales. La industria, mientras tanto, estaba en expansión y atraía a la población desplazada del campo a las ciudades. Al finalizar la guerra la migración interna ya había empezado a cambiar radicalmente la distribución física y las ocupaciones de una parte importante de la población. Estos cambios contribuyeron a debilitar la base política del conservadurismo porque redujeron la dominación de los productores agrarios al tiempo que intensificaban el peso de sectores que dependían de las manufacturas urbanas o veían éstas con simpatía.

Si la reducción de gastos y la recuperación se convirtieron en la tónica del decenio de 1930, la revolución estuvo a la orden del día en los primeros años cuarenta. En 1942 el ré-

gimen conservador de Ramón S. Castillo, que había dado marcha atrás a los intentos de liberalización de Ortiz, se hallaba dividido y a la deriva. En el extranjero se encontraba ante la creciente oposición de Estados Unidos a su política de neutralidad en la guerra y a su resistencia a ingresar en la alianza panamericana, posturas que había adoptado, al menos en parte, en respuesta a la poca disposición norteamericana a cooperar en el comercio. En el interior el gobierno tenía que hacer frente a una oposición parecida por parte de diversos grupos de intereses y organizaciones políticas, algunas de ellas antiguas partidarias de los conservadores. Pero el desafío más serio procedía de los nacionalistas de la ultraderecha, que se hallaban agrupados en diversas facciones y recibían poco apoyo popular pero iban afianzánsose cada vez más en el ejército. El golpe militar de junio de 1943 desencadenó la Revolución Nacionalista, que se comprometió a destruir todos los lazos «imperialistas», a llevar a cabo la expansión industrial patrocinada por el estado y encabezada por una nueva industria de armamentos y a instaurar un sistema político autoritario que extirpara el «comunismo» y el «liberalismo». Dirigida por los nacionalistas, Argentina emprendió una reforma radical y un profundo cambio político. Sin embargo, la dictadura militar corporativista que pretendían crear los nacionalistas de 1943 no llegó a materializarse. En cambio, 1943-1946 fue el período del ascenso de Juan Perón, que culminó con su elección como presidente. Con el respaldo de un movimiento de masas obreras recién creado, los peronistas llegaron al poder con un programa de industrialización y reforma social. La victoria de Perón en 1946 y el triunfo del «populismo nacional» se convirtieron así en la principal consecuencia de la guerra, y el propio Perón, paladín de la «soberanía económica» y la «justicia social» y enemigo de la «oligarquía», el «colonialismo» y el «comunismo», encarnó la transición ideológica de los primeros años cuarenta.

La política bajo Uriburu y Justo, 1930-1938

La revolución de septiembre de 1930 fue fruto de las profundas animosidades personales que Hipólito Yrigoyen, presidente de la república de 1916 a 1922 y de nuevo a partir de 1928, despertaba en los conservadores. En 1930 eran pocos los conservadores que se oponían a la «democracia» como sistema político. Seguía preocupándoles más la forma en que había funcionado la democracia bajo los radicales. Analizaban la política en categorías aristotélicas: bajo Yrigoyen la «democracia» se había deslizado hacia la «demagogia» y la «tiranía»; la venalidad de los caciques y los comités del partido yrigoyenista había asfixiado la misión de la democracia, que era alcanzar la «verdadera representación». Detrás de estas percepciones había mucho esnobismo patricio. «Camarillas obsequiosas» y un «abyecto círculo de aduladores ineptos» habían dominado y finalmente destruido el régimen de Yrigoyen. El propio presidente caído era de «baja estofa», hijo ilegítimo de un «vasco desconocido», que mucho tiempo atrás emprendió su carrera política en los garitos y las galleras del distrito bonaerense de Balvanera, donde en el decenio de 1870 había sido jefe de policía. Los cómplices de Yrigoyen eran hombres como él mismo, una «ralea a la caza de beneficios y de enriquecimiento propio» y responsable del otro gran fallo de la democracia, su «avasallamiento de las jerarquías siguiendo los caprichos de la chusma».[1] En 1937, durante su campaña para alcanzar la presidencia, Roberto María Ortiz declaró que la revolución de 1930 había «puesto fin a

1. Véase Carlos Ibarguren, *La historia que he vivido*, Buenos Aires, 1955, pp. 318, 368, 400, 428.

un sistema de desgobierno que substituía el imperio de la ley por el capricho arbitrario de un demagogo que supeditaba el interés general de la nación a apetitos desordenados estimulados por la presión de lo más bajo de las masas».[2]

Los conservadores odiaban a Yrigoyen desde hacía mucho tiempo. Habían hecho todo lo posible por acabar con su reputación antes de las elecciones de 1928, y poco después de éstas empezaron a conspirar para derrocarle. La oportunidad que esperaban llegó con la depresión. El yrigoyenismo estaba edificado sobre el patronazgo y su solidez dependía del flujo de gastos del estado. Controlar a la clase media de esta manera daba buenos resultados durante los períodos de expansión económica, tales como 1928 y la mayor parte de 1929, cuando los ingresos iban en aumento. Pero fracasaba en seguida en tiempos de crisis económica, como la que empezó a finales de 1929. En ese momento Yrigoyen fue víctima de una pugna por los recursos, que disminuían rápidamente, entre los intereses exportadores y poseedores de propiedades, la mayoría de ellos conservadores, y la clase media urbana, que era principalmente radical. Al sobrevenir la depresión, los primeros exigieron que se hiciesen recortes drásticos en los gastos públicos para reducir la presión que soportaban el crédito y los tipos de interés y permitir a los bancos responder con mayor eficacia a los terratenientes y comerciantes en apuros. La clase media reaccionó exigiendo que se aumentara todavía más el gasto público con el fin de proteger el empleo y detener la caída de los ingresos urbanos. En 1930 el gobierno hizo esfuerzos desesperados por superar estas presiones encontradas. Finalmente empezó a reducir el gasto, pero no con la rapidez suficiente según los conservadores y demasiado rápidamente en opinión de los radicales. Así, al tiempo que se intensificaba la oposición de los intereses terratenientes y comerciales también se desintegraba el apoyo popular a Yrigoyen.

Los apologistas del golpe de 1930 solían presentar al ejército como sencillamente el instrumento de la voluntad popular, que actuaba en nombre del pueblo: la revolución, según declaró Carlos Ibarguren, «fue el ejército hecho pueblo, y el pueblo hecho ejército».[3] Como recordaría Felix Weil:

> Nadie ... movió un dedo en defensa del gobierno legal. Los trabajadores se mostraron indiferentes, apáticos, no se convocó ninguna huelga, no se organizó ninguna manifestación, no se cerró ninguna fábrica ni taller ... Con tantos empleados del gobierno, especialmente policías y militares, sin cobrar desde hacía algún tiempo, a la burocracia militar y civil no le importó que se cambiara el gobierno viciado legal pero insolvente de un reformador senil, fantasioso e insincero por el gobierno de un general del que podía esperarse que contara con el favor de los bancos, pagase los salarios puntualmente y recompensara con generosidad a sus seguidores.[4]

En este ambiente fue fácil preparar un golpe con una organización notablemente escasa y con un mínimo de fuerza militar. El golpe del 6 de septiembre de 1930 fue una acción casi exclusivamente militar. El general José Félix Uriburu, su líder, que había participado en la insurrección fracasada contra Juárez Celman en julio de 1890, prohibió explícitamente la participación de civiles alegando que éstos habían sido la causa de la derrota cuarenta años antes. Los líderes de la ultraconservadora Liga Republicana, cuyos

2. Citado en Felix Weil, *Argentine Riddle*, Nueva York, 1944, p. 63.
3. Ibarguren, *La historia...*, p. 380.
4. Weil, *Argentine Riddle*, p. 39.

miembros habían combatido esporádicamente a los yrigoyenistas en las calles durante el año anterior, instaron a Uriburu a organizar la revolución, pero no desempeñaron ningún papel activo en el levantamiento propiamente dicho. Por tanto, la función de los civiles consistió en preparar el terreno para el golpe por medio de manifestaciones callejeras, discursos incendiarios y un ataque masivo por parte de la prensa de la oposición durante las semanas que lo precedieron.

La revolución propiamente dicha fue poco más que la marcha de unos cuantos centenares de cadetes desde la guarnición militar de Campo de Mayo hasta la Casa Rosada, la sede del gobierno, en el centro de Buenos Aires, de la cual tomaron posesión. Uriburu no había hecho ningún esfuerzo por organizar movimientos en las provincias ni por trazar planes detallados para apoderarse de centros de comunicaciones e instalaciones importantes. Los preparativos complejos resultaron de todo punto innecesarios. El propio Yrigoyen, que se había enterado de la insurrección, huyó a La Plata. Cuando las tropas que se encontraban allí le negaron su apoyo dimitió y fue detenido. Al entrar en el centro de Buenos Aires, los cadetes encontraron resistencia por parte de unos cuantos francotiradores, la mayoría de los cuales disparaban desde la azotea del edificio del Congreso, y los intercambios de disparos causaron algunas bajas en ambos bandos. Pero esta oposición fue dominada rápidamente y los cadetes siguieron bajando por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Allí el vicepresidente, Enrique Martínez, intentó negociar con los rebeldes, pero fracasó y también dimitió.

Después de hacerse con el poder, los revolucionarios proclamaron un gobierno provisional encabezado por Uriburu. El nuevo régimen consistía casi enteramente en civiles, la mayoría de ellos conservadores de cierta edad que habían ocupado cargos gubernamentales por última vez antes de 1916 bajo Roque Sáenz Peña o su sucesor, Victorino de la Plaza. El gobierno provisional empezó inmediatamente a expulsar a los radicales de la administración, los gobiernos provinciales y las universidades, pero pronto resultó obvio que el nuevo régimen estaba claramente dividido en dos facciones y que la oposición a los yrigoyenistas era lo único que lo unía. El propio Uriburu capitaneaba la primera de las facciones, apoyado por Matías Sánchez Sorondo, el ministro del Interior, y por Carlos Ibarguren, que se convirtió en interventor de Córdoba. A ojos de mucha gente, la facción de Uriburu comprendía los «fascistas» de Argentina, es decir, los elementos empeñados en imponer un sistema como el de Mussolini. Uriburu no sólo persiguió a los radicales, sino que también fusiló fríamente a un par de anarquistas declarados culpables de sabotaje. Alentó la formación de la Legión Cívica Argentina, cuyos miembros llevaban uniformes de estilo fascista y adoptaron el saludo fascista.

Sin embargo, Uriburu rechazó una y otra vez la etiqueta de fascista y el fascismo como «doctrina extranjera» que era «inapropiada» para Argentina. En su lugar, aspiraba a una «democracia verdadera», sin los caciques y los comités yrigoyenistas. De hecho, esta aspiración parecía hacer de Uriburu no un fascista sino un liberal, porque la «democracia», como decía una crítica derechista, le identificaba con «el lenguaje y las ideas de la revolución francesa», el fundamento del liberalismo moderno.[5] En realidad, ni el fascismo ni el liberalismo eran la principal inspiración de las ideas políticas de Uruburu, sino que éstas eran fruto del escolasticismo; su concepción de la democracia estaba más cerca de la idea que de ella se tenía en la antigua Grecia que de su versión moderna en

5. Véase Comisión de Estudios de la Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, *El nacionalismo: Una incógnita en constante evolución*, Buenos Aires, 1970, p. 29.

Norteamérica o la Europa occidental. Los fundamentos escolásticos de las ideas de Uriburu aparecían con la máxima claridad en un manifiesto que publicó en febrero de 1932 y que, según dijo, era «la doctrina de la Revolución de Septiembre». Este documento —que se prestaba mucho a la ironía en vista de la conducta de Uriburu como presidente— se hacía eco de preceptos de san Agustín, santo Tomás de Aquino y sus sucesores:

> La razón de la existencia de la autoridad suprema ... es ... la consecución del bienestar colectivo ... Cualquier gobierno que no acierte a trabajar con este fin, ya sea por abusar de su autoridad o por abdicar de sus responsabilidades, es un gobierno tiránico ... El gobierno tiránico es un gobierno sedicioso porque al sacrificar el bien común compromete la unidad y la tranquilidad de la sociedad, que existe por la sencilla razón de asegurar el bienestar de sus miembros ... Y todo gobierno sedicioso deja, por definición, de ser un gobierno, de tal modo que una revolución organizada que lo derroque mediante un acto de fuerza es totalmemte legítima mientras su objetivo sea restaurar el bienestar colectivo.[6]

Para Uriburu el propósito de la revolución era establecer un mejor sistema de representación y evitar así la tiranía de una «minoría mística» como los caciques yrigoyenistas, de manera que «representantes auténticos de intereses sociales reales puedan actuar dentro del estado ... e impedir que el profesionalismo electoral monopolice el gobierno y se imponga entre el gobierno y las fuerzas vivas».[7] Inspirándose en la teoría corporativista de la época, Uriburu, por tanto, sugirió que en el Congreso estuvieran representados los gremios y no los partidos. Él y sus seguidores calificaban esta idea de nacionalismo, ya que, según afirmaban, unificaría y armonizaría las partes constituyentes de la nación. Así pues, los uriburistas hicieron campaña a favor de la reforma constitucional y se concentraron en cambiar el Artículo 37 de la Constitución de 1853: la composición y las funciones de la Cámara de Diputados. Uriburu parecía dispuesto a convocar elecciones y retirarse una vez hubiera llevado a cabo esta reforma. Al menos durante un tiempo albergó la esperanza de transmitir la presidencia no a un fascista sino a Lisandro de la Torre, veterano liberal-conservador que había sido uno de sus camaradas durante la revolución de 1890 y era su amigo desde entonces.

Uriburu no logró poner en práctica la reforma constitucional ni preparar su propia sucesión. Sus partidarios eran principalmente abogados y académicos conservadores. Sin embargo, la mayoría del ejército y las fuerzas vivas, los grandes estancieros y comerciantes que dominaban la economía y constituían la principal base civil para la revolución, apoyaban la segunda facción del gobierno provisional. Acaudillada por el general Agustín Pedro Justo, esta facción pretendía crear un partido conservador popular del tipo que Sáenz Peña había concebido en 1912 y que impediría que los yrigoyenistas recobrasen el poder. Sus miembros querían una política económica conservadora que protegiese la economía basada en la exportación y defendiera los vínculos con Gran Bretaña y la Europa occidental. Así pues, la etiqueta que mejor cuadra a la facción es la de «liberal-conservadora», y la facción difería de los nacionalistas capitaneados por Uriburu en que se oponía a la reforma constitucional y a la representación corporativa, que, al igual que los otros

6. *Crisol*, 14 de febrero de 1932.

7. Citado en Carlos Ibarguren hijo, *Roberto de Laferrère (periodismo-política-historia)*, Buenos Aires, 1970, p. 32.

adversarios de Uriburu, veía como potencialmente fascista. En esencia la disputa entre «liberales» y «nacionalistas» tenía que ver con la estructura del estado. Los primeros se oponían al tipo de estado mediador situado por encima de la sociedad que proponían los teóricos corporativistas. Querían el gobierno de una clase, el gobierno controlado por ellos mismos: los principales intereses productores y comerciales.

El momento crítico de la pugna entre las dos facciones llegó en abril de 1931 cuando Sánchez Sorondo, como ministro del Interior, convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires con la intención de utilizarlas para demostrar el apoyo popular a Uriburu y reforzar a éste contra Justo. El plan falló por completo cuando las elecciones dieron una victoria amplia y del todo imprevista a los radicales que los observadores atribuyeron en parte a un reciente y desacertado incremento del precio de los sellos de correos. A partir de este momento, mientras la posición de Uriburu se desmoronaba, el grupo de Justo controló el gobierno provisional, que fijó la fecha de las elecciones presidenciales para noviembre de 1931, y el papel de Uriburu quedó reducido a poco más que a tener a los radicales a raya. Después de derrotar una revuelta radical en julio de 1931, el presidente detuvo a la mayoría de los radicales más destacados y en septiembre prohibió que sus candidatos concurriesen a las elecciones de noviembre.

De esta manera Justo logró abrirse paso hasta la presidencia. En noviembre de 1931, habiendo mantenido cuidadosamente su prestigio en el ejército y entre las fuerzas vivas, encabezó la recién formada «Concordancia», que era una coalición de partidos con tres ramas principales: los antiguos conservadores, que ahora se llamaban Demócratas Nacionales, aunque eran en su mayor parte oligarcas regionales; los Radicales Antipersonalistas, que se habían escindido de Yrigoyen en 1924, y los Socialistas Independientes, que se habían separado del Partido socialista en 1927. Los únicos adversarios de Justo en noviembre de 1931 eran una coalición del Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre y los socialistas ortodoxos de Nicolás Repetto. De un electorado de 2,1 millones de personas, votaron 1,5 millones. El total de votos que obtuvo la Concordancia fue de un poco más de 900.000, y el de la alianza de los demócratas progresistas y los socialistas de un poco menos de 500.000. Tres meses más tarde, en febrero de 1932, Justo asumía la presidencia y Uriburu partía con destino a Europa, donde murió, víctima del cáncer, al cabo de poco tiempo.

Las elecciones de 1931 devolvieron la presidencia a los mismos intereses, en particular los terratenientes y exportadores de las pampas, que controlaban el gobierno antes de 1916. Justo había adquirido el poder gracias al respaldo del ejército y de las fuerzas vivas y a la proscripción de los radicales. Hubo mucho fraude electoral. Inmediatamente después de los comicios, De la Torre, Repetto y los radicales dieron detalles de casos de fraude descarado en todo el país. En algunas partes la policía había robado las papeletas a los votantes de la oposición que hacían cola para depositarlas en las urnas; se demostró que las fichas de los que habían votado contenían muchas firmas falsificadas, lo cual significaba que entre los supuestos votantes de la Concordancia había muchas personas que en realidad no habían votado. Los partidarios de la oposición habían visto algunos sellos y precintos falsificados en las urnas, lo cual sugería que o bien dichas urnas eran falsas o las habían abierto antes del recuento oficial, para comprobar y hacer los «ajustes» necesarios para asegurarse de que su contenido diera los resultados deseados. En numerosos casos se habían usado papeletas falsificadas y en todavía más casos habían votado los muertos.

El fraude electoral, que había sido endémico hasta la ley de Sáenz Peña de 1912, no era ninguna novedad en Argentina. El fraude había persistido bajo los radicales, en par-

ticular en las zonas rurales, aunque normalmente se había practicado indirectamente, más por medio de la intimidación solapada que de la falsificación directa. Pero en el decenio de 1930, a partir de noviembre de 1931, el fraude volvió a ser común en la política y a veces los conservadores confesaban francamente que recurrían a él: era, según decían, un «fraude patriótico», una necesidad lamentable para tener a los radicales a raya. Ejemplos notorios fueron las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1935, en las cuales los partidarios de Manuel Fresco se aseguraron la victoria utilizando la fuerza para impedir que votasen los radicales, cambiando las urnas y substituyendo el voto verdadero por otro inventado en los clubes conservadores. En unas elecciones que hubo en Corrientes en 1938 votaron más hombres de los que constaban en el censo electoral; en Mendoza, en 1941, conservadores armados con fusiles vigilaban las cabinas de votación y observaban cada una de las papeletas que se depositaban. Entre las numerosas formas de soborno electoral durante este período, una de las más comunes consistía en ofrecer a los votantes sobres cerrados que contenían papeletas marcadas de antemano y que el votante introducía a escondidas en la cabina y utilizaba para votar. Para demostrar que había cumplido la misión, salía con la tarjeta y el sobre que le habían dado dentro; después de entregarlos, se le pagaban sus servicios. En el decenio de 1930 la ciudad de clase obrera de Avellaneda, justo en las afueras de la capital, tenía una de las peores reputaciones en lo que se refería a la corrupción política. Según se decía, allí, en lo que algunos llamaban el «Chicago argentino», los caciques políticos conservadores encabezados por Alberto Barceló estaban muy metidos en el juego, la prostitución y la extorsión, y parte de los beneficios que se obtenían de estos negocios se usaban para controlar las elecciones. Durante todo el decenio de 1920 los conservadores se habían quejado en repetidas ocasiones de los caciques, los comités y las técnicas de patronazgo corruptas que habían empleado los radicales. A pesar de ello, después de recuperar el poder en 1931, los propios conservadores se apresuraron a recurrir a versiones todavía más burdas de los mismos métodos.

Los tres partidos que formaban la Concordancia se fusionaron gradualmente y perdieron por completo su identidad propia. En 1934 el Partido Socialista Independiente y los antipersonalistas ya habían desaparecido; la función principal de ambos partidos había sido permitir que un reducido puñado de líderes políticos se pasara a los conservadores y tomara posesión de cargos bajo el gobierno de Justo. De los socialistas independientes, por ejemplo, procedía Federico Pinedo, dos veces ministro de Hacienda durante este período, que patrocinó varias de las principales reformas económicas de la Concordancia.[8] Otro destacado socialista independiente era Antonio de Tomaso, talentoso ministro de Agricultura, cuya carrera terminó al morir en 1934. Pero la mayoría de los líderes de la Concordancia eran antipersonalistas: el propio Justo; Roberto María Ortiz, que sucedió a Justo en la presidencia, y Leopoldo Melo, a quien Yrigoyen había derrotado en las elecciones de 1928 y que ahora servía en calidad de ministro del Interior en el gobierno de Justo. Durante todo el decenio de 1930 los conservadores de verdad fueron una minoría en el gobierno. El más prominente era Ramón S. Castillo, el último de los ministros de Justicia e Instrucción Pública de Justo. En 1938 Castillo se convirtió en vicepresidente de Ortiz y luego, en 1940, él mismo en presidente.

Así, las figuras más progresistas eran muy superiores en número a los reaccionarios en el gobierno, y aunque durante algún tiempo su preponderancia no contribuyó en nada

8. Véase abajo, pp. 181-182, 198-201.

a disminuir el fraude electoral, dio al régimen de Justo un carácter relativamente benévolo y tolerante que contrastaba mucho con el ambiente político represivo que existiera bajo Uriburu. Justo en persona dedicaba gran parte de su tiempo a mantener su posición en el ejército, procurando aislar a algunos uriburistas intransigentes capitaneados por el coronel Juan Bautista Molina que continuamente tramaban complots para derribar el gobierno. Durante todo el decenio de 1930 el ejército fue una fuerza política de importancia fundamental que Justo mantuvo firmemente controlada y fuera de la política mediante una hábil estrategia de nombramientos y ascensos.

Al tomar posesión de su cargo en 1932, Justo levantó el estado de sitio que estaba en vigor desde la revolución de 1930. Puso en libertad y amnistió a los presos políticos de Uriburu, entre ellos Hipólito Yrigoyen, que hasta su muerte, acaecida en julio de 1933, hizo débiles esfuerzos por reunir a sus partidarios para volver a la política. Justo rehabilitó a los profesores universitarios a los que Uriburu había expulsado porque eran radicales. Reprimió con dureza las actividades de la Legión Cívica, la organización paramilitar patrocinada por Uriburu. La legión, ahora bajo el liderazgo del general retirado Emilio Kinkelín, tuvo poca importancia después de 1932, aunque se las arregló para sobrevivir hasta los primeros años cuarenta. La suerte de la legión es un ejemplo de la habilidad con que Justo aisló y debilitó repetidamente a sus adversarios políticos. A medida que desmilitarizaba el régimen, Justo adoptó un nuevo estilo tecnocrático de gobierno que confiaba ciertos aspectos de la política a especialistas. El más famoso de estos especialistas era Raúl Prebisch, que se convirtió en miembro destacado del equipo encabezado por Pinedo que concibió y puso en práctica las importantes reformas económicas del decenio de 1930.

Justo experimentó pocas dificultades con el trabajo organizado, toda vez que, en el apogeo de la depresión, los obreros luchaban principalmente por evitar el paro. El gobierno hizo de mediador en una huelga de los obreros de teléfonos en 1932 y también en posteriores disputas laborales. Esta forma de actuar contrastaba con lo ocurrido bajo Uriburu, cuyo gobierno amenazó en determinado momento con fusilar a tres taxistas declarados culpables a menos que obtuviera una obsequiosa declaración de apoyo por parte de destacados sindicalistas. El régimen de Justo patrocinó una importante serie de leyes laborales que incluían las indemnizaciones por despido y restricciones al trabajo los sábados por la tarde, medida que recibió el nombre de «sábado inglés». Aun así, el gobierno nunca vaciló en utilizar la represión contra los sindicatos y Justo continuó las deportaciones de «agitadores» que habían empezado después de la Ley de Residencia de 1901. El gobierno aumentó los poderes de la policía y creó una sección especial para que se ocupara de los asuntos laborales.

En 1930 el movimiento obrero se había unido oficialmente en la Confederación General del Trabajo (CGT), que fusionó las dos confederaciones principales que existían a finales de los años veinte, la socialista Confederación Obrera Argentina (COA) con la sindicalista revolucionaria Unión Sindical Argentina (USA). Aunque los impresores dominaron durante un tiempo el liderazgo de la CGT, el único sindicato que tenía alguna importancia era el de ferroviarios, la Unión Ferroviaria, que representaba alrededor del 40 por ciento de los afiliados a la CGT. Liberales económicos dirigían la Unión Ferroviaria; apoyaban el libre comercio, la reanudación de las inversiones extranjeras y —su única desviación de los conceptos librecambistas— la protección de los obreros contra el despido y el paro. Durante todo el decenio de 1930 menos de una quinta parte de los trabajadores de Buenos Aires estaba sindicada. La mayoría de los sindicatos de aquel

momento conservaban vínculos con el Partido Socialista, al menos extraoficiales, si bien aún existían reducidos grupos anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Un sindicalista revolucionario, Antonio Tramonti, estuvo al frente de la CGT hasta que fue derrocado en la escisión sindical de 1935, que dejó a la mayoría de los sindicatos bajo la dominación de José Domenech, socialista que guió a la CGT hacia una postura más explícitamente política y específicamente antifascista. En las postrimerías del decenio de 1930 la CGT dedicó la mayor parte de sus energías a la defensa de la república española durante la guerra civil. La influencia comunista en los sindicatos siguió siendo insignificante hasta que en 1936 se creó un nuevo sindicato de trabajadores de la construcción, la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), cuando el Comintern ordenó a los comunistas de todo el mundo que formaran un movimiento sindical independiente liderado por los comunistas. En 1939 la FONC ya se había convertido en el segundo sindicato argentino en orden de importancia y daba el ejemplo en lo que se refería a sindicar a los obreros no especializados y mal pagados, la mayoría de los cuales había dejado el campo por la ciudad. A pesar del crecimiento de la FONC durante los últimos años treinta, el Partido Comunista no había avanzado mucho desde su creación en 1920 y aún consistía en poco más que un puñado de intelectuales y líderes obreros cuya influencia política era todavía relativamente pequeña.

La persuasión y la manipulación se convirtieron en los rasgos distintivos del régimen de Justo. Durante un tiempo logró la estabilidad política, pero a costa del aumento de la desilusión y la indiferencia populares. El gobierno nunca consiguió liberarse del estigma de sus orígenes, que radicaban en el fraude electoral. La fuerza aparente de Justo se derivaba en gran parte de la debilidad de los adversarios del gobierno, de la inexistencia de una oposición eficaz que presentara alternativas auténticas a su política. Durante el decenio de 1930 el antiguo Partido Socialista tampoco creció mucho más allá de su baluarte tradicional en la capital federal. Los socialistas nunca se recuperaron del todo de la defección de los socialistas independientes en 1927 y la muerte del fundador del partido, Juan Bautista Justo, en 1928. Bajo unos líderes de edad avanzada encabezados por Nicolás Repetto, el Partido Socialista seguía siendo el mayor de la capital, donde el fraude electoral era menos común que en otras partes, pero su programa venía a ser el mismo que veinticinco años antes. Tan entregado como siempre a su electorado de consumidores de clase obrera, el partido funcionaba de acuerdo con más o menos las mismas suposiciones liberales de carácter general que guiaban la actuación del gobierno. El atractivo de los socialistas estribaba en sus evaluaciones seculares y realistas de los asuntos públicos; de lo que ahora carecían era de la energía y el evangelismo que habían mostrado bajo Juan Bautista Justo años antes al desafiar a la vieja oligarquía. A mediados de 1936 recuperaron finalmente un poco de su estilo de antaño cuando, codo a codo con la CGT, emprendieron campañas de apoyo a la atribulada república española, pero cuando ésta acabó sucumbiendo ante las fuerzas de Franco a principios de 1939, el socialismo argentino ya iba camino de convertirse con demasiada rapidez en una fuerza extinguida.

También se encontraba en rápida decadencia el Partido Demócrata Progresista, que a mediados del decenio de 1930 equivalía a poco más que a la persona de su líder, Lisandro de la Torre. En ese momento De la Torre llevaba mas de cuarenta años ocupando un lugar destacado en la política desde su base en Rosario, donde durante mucho tiempo había sido portavoz de los agricultores y los pequeños estancieros del litoral. Admirado por su oratoria, su integridad y su personalidad pintoresca y enérgica, De la Torre defendía ideas que en su mayor parte eran conservadoras. Pero durante toda su carrera, que

empezó en la rebelión de 1890 contra Juárez Celman, había sido un demócrata firme que detestaba el fraude electoral. Por ser partidario decidido de la democracia, De la Torre nunca encontró mucho apoyo entre los conservadores más tradicionales, aparte de Uriburu en 1930 (cuyo ofrecimiento de la presidencia había rechazado).

En 1935 De la Torre fue miembro de una comisión del Congreso que investigó la industria cárnica y en esa capacidad provocó uno de los mayores escándalos políticos de la presidencia de Justo. Durante los primeros años treinta las empresas de productos cárnicos británicas y norteamericanas reaccionaron a la caída de los precios organizando un consorcio de fijación de precios para salvaguardar los beneficios a expensas de sus proveedores. Así, mientras que los precios que las empresas cárnicas pagaban a los estancieros por el ganado bajaban de una media de treinta y cuatro centavos el kilo en 1929 a sólo diecisiete centavos en 1933, entre 1930 y 1934 los beneficios de las empresas cárnicas oscilaban entre el 11,5 y el 14 por ciento de las inversiones de capital. En 1935 la comisión probó las acusaciones de que se había creado un consorcio ilegal. Pero De la Torre manifestó una opinión discrepante y fue mucho más lejos que las críticas un tanto calladas de sus colegas y acusó a las empresas de numerosos fraudes contables y fiscales. Se había descubierto que una compañía, la Vestey Brothers, trataba de sacar clandestinamente sus cuentas del país en un contenedor cuyo rótulo decía «carne de buey enlatada». Además, según declaró De la Torre, miembros del gobierno encabezados por el ministro de Agricultura, Luis Duhau, habían sido cómplices de estas evasiones y se habían beneficiado personalmente de ellas. El Congreso debatió las alegaciones de De la Torre, mientras cada uno de los bandos insultaba al otro y los miembros del gobierno negaban categóricamente las acusaciones. La tensión fue en aumento y un espectador desconocido trató de matar a tiros a De la Torre, pero sólo consiguió herir mortalmente a Enzo Bordabehere, su joven colega de Santa Fe en el Senado. Después de esto, De la Torre desapareció rápidamente de la política y al cabo de pocos años se quitó la vida.

Durante todo el decenio de 1930, de hecho casi hasta la víspera de las elecciones de 1946, el radicalismo siguió siendo el mayor de los movimientos políticos de Argentina, y sólo la proscripción, el fraude o las discrepancias internas le impidieron llegar a la presidencia. Poco después de la revolución de 1930 los radicales volvieron a dar muestra de gran parte de la energía y el ímpetu que habían desplegado durante los años veinte cuando se embarcaron en un intento, a veces violento, de recuperar la supremacía. En abril de 1931 ya volvían a tener una mayoría popular en la provincia de Buenos Aires; en julio intentaron una rebelión armada, aventura que algunos de ellos repitieron, de nuevo sin éxito, en 1933. Tras el golpe de estado los radicales denunciaron incesantemente el encarcelamiento de Hipólito Yrigoyen, la mayor parte del cual tuvo por marco la isla de Martín García, en medio del Río de la Plata, y cuando Justo finalmente dejó en libertad a Yrigoyen, muchos radicales acudían todos los días a rendirle homenaje en su domicilio de Buenos Aires. La muerte de Yrigoyen en 1933 provocó una de las mayores manifestaciones de la historia de Buenos Aires.

Aunque en el momento de su muerte Yrigoyen hubiese recuperado gran parte de la popularidad de la que gozara al comienzo de su segundo gobierno cinco años antes, después de su derrocamiento, continuamente enfermo, se había convertido en poco más que un símbolo nostálgico. En abril de 1931 el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear volvió a Argentina desde su segundo domicilio en París y se convirtió, con la aprobación de Yrigoyen y a pesar de sus pasadas diferencias, en el líder reconocido del partido, posición que conservó hasta 1942, año de su muerte. De Alvear, vástago de una gran fami-

La patricia que parecía encarnar precisamente a la «oligarquía» que el radicalismo se había comprometido a destruir, había carecido hasta ahora de una base de poder personal en el partido. Pero su posición subió de inmediato en 1931 cuando repudió públicamente a Uriburu y luego se sometió alegremente a la detención y el encarcelamiento a manos del gobierno provisional. Con toda probabilidad, de haberse librado los radicales de la proscripción y el fraude durante las elecciones de noviembre de 1931, De Alvear, que era su candidato, hubiera vuelto a ser presidente.

Sin embargo, como líder del partido durante todo el decenio siguiente, De Alvear no mantuvo el impulso y la energía de 1931. Como presidente, continuó sus intentos de hacer entrar en vereda a los comités y los caciques del partido y convertir éste, como intentaran los antipersonalistas, en un movimiento conservador popular en torno a una clara serie de programas en vez de la búsqueda de patronazgo o asuntos individuales como la campaña pro nacionalización del petróleo en 1927-1930. En este empeño De Alvear volvió a fallar, y a medida que pasó el tiempo fue transformándose en una figura cada vez más anticuada cuyos pactos secretos con el gobierno daban pie a muchos rumores y molestaban a gran parte de las bases del partido. Tampoco cambió mucho el radicalismo después de morir De Alvear cuando el liderazgo pasó a Honorio Pueyrredón, hombre de carácter y orígenes parecidos.

Así pues, bajo un liderazgo anodino y nada inspirador los radicales empezaron a navegar a la deriva. Hasta 1935 se negaron invariablemenete a participar en las elecciones y readoptaron la «abstención», una de las tácticas de Yrigoyen en los primeros tiempos del partido cuya finalidad era resaltar el fraude electoral y protestar contra él. Cuando finalmente dejaron de abstenerse en 1935 el fraude y la necesidad de reconstruir la organización del partido hicieron que los radicales fueran electoralmente débiles durante varios años. Los socialistas dominaron la capital hasta los primeros años cuarenta y los conservadores, bajo líderes como Alberto Barceló y Manuel Fresco, controlaban la provincia de Buenos Aires. El gran baluarte del radicalismo se encontraba ahora en Córdoba, bajo Amadeo Sabbatini, que durante mucho tiempo había rivalizado con De Alvear por el control del partido nacional. Los radicales, al igual que los socialistas, parecían no tener ninguna idea nueva. Aunque continuaron exigiendo la nacionalización del petróleo (asunto que Uriburu y Justo sencillamente dejaron de lado), también ellos conservaron una perspectiva en su mayor parte liberal, añorando los años veinte y, exceptuando algunos grupos marginales, oponiéndose a toda reforma importante. Los radicales seguían estando cargados de imperativos morales, pero con frecuencia faltos de sustancia, atormentados por incesantes rivalidades internas. En 1944 Felix Weil no pudo discernir ninguna diferencia real entre la perspectiva de los radicales y la de los conservadores:

> La disensión predomina aún más entre los Radicales [*sic*] hoy. Todavía no tienen ningún programa político constructivo y su necesidad de liderazgo autoritario es mayor que nunca desde la muerte de De Alvear. La oposición a los conservadores no es un factor lo bastante fuerte como para unificar a un partido desmoralizado, en particular porque es difícil distinguir entre las deslumbrantes generalidades de los radicales y las de los conservadores. Los conservadores representan «el progreso moderado y el gobierno honrado», y los radicales, un «programa suavizado y un gobierno limpio». Ninguno de los dos habla en serio.[9]

9 Weil, *Argentine Riddle*, p. 6.

Economía y sociedad en el decenio de 1930

La revolución de 1930 tuvo lugar en el momento en que la economía argentina acusaba los efectos de la depresión mundial. En 1930-1931 las ganancias obtenidas de la exportación cayeron en un tercio, de una media de alrededor de mil millones de pesos durante los últimos años veinte a sólo 600 millones en 1931. El producto interior bruto (PIB) descendió del 14 por ciento entre 1929 y 1932, con la producción de cereales disminuyendo en un 20 por ciento y la manufacturación en un 17 por ciento. Después de la suspensión del patrón oro al cerrarse la Caja de Conversión a finales de 1929, el peso se depreció en alrededor del 25 por ciento antes de finalizar 1931. Argentina se libró de las peores aflicciones de la depresión, tales como los índices de paro de entre el 20 y el 30 por ciento que se registraron entre los obreros industriales en Alemania y Estados Unidos y la catástrofe que cayó sobre Chile cuando los mercados exteriores del cobre desaparecieron casi por completo. Aun así, la crisis afectó seriamente a la agricultura y provocó una oleada de quiebras en las ciudades al descender la manufacturación y el comercio. A principios de 1931 el índice de quiebras ya era el triple del de mediados de 1929 y alcanzó un punto máximo tras la mala cosecha de 1930. De 1929 a 1933 los precios al por mayor de los principales productos de exportación de Argentina —cereales, linaza y carne— descendieron en aproximadamente la mitad. Se calcula que los salarios reales cayeron en un 10 por ciento.

El gobierno provisional de 1930-1931 tomó medidas rápidas y enérgicas en relación con el gasto público y el comercio exterior. En 1930, después de dos años de rápido crecimiento del gasto público bajo Yrigoyen, el déficit presupuestario había subido hasta la elevada tasa del 6,5 por ciento del PIB. En 1931 la deuda pública había alcanzado 1.300 millones de pesos, lo cual representaba un incremento de más del 50 por ciento desde 1929. La rápida caída de los ingresos provocada por la depresión agravó las dificultades que tenía el nuevo gobierno para frenar la subida de la deuda pública. El gobierno respondió con rigurosos recortes del gasto, que cayó de 934 millones de pesos en 1930 a 648 millones en 1932. Los despidos masivos de personal de la administración pública —alrededor de 20.000 en total— se convirtieron en el arma principal de la lucha para reducir el gasto, siendo los radicales las víctimas principales. En un intento de contener la caída de los ingresos el gobierno subió los impuestos y en 1931 introdujo un impuesto sobre la renta que pretendía disminuir la dependencia de los derechos arancelarios como fuente de finanzas públicas. El déficit presupuestario había caído hasta el 1,5 por ciento del PIB en 1932.

En 1930 cayeron tanto el valor de las exportaciones como su volumen, esto último debido a las malas cosechas. La contracción de las importaciones, sin embargo, fue más lenta y sus precios cayeron de forma mucho menos vertiginosa que los de las exportaciones. La relación de intercambio, tomando 1937 como base 100, ascendía a 97,6 en 1928, pero sólo a 63,2 en 1931. El resultado fue un grave déficit de la balanza de pagos que vació las reservas de oro del país y amenazó su capacidad de atender al servicio de la deuda exterior. En un esfuerzo por recortar las importaciones el gobierno de Uriburu subió los aranceles, que pasaron a ser más importantes como reguladores del intercambio que como instrumento fiscal. En octubre de 1931, siguiendo el ejemplo de otros muchos países, Argentina impuso controles de cambios. Estas medidas resultaron eficaces al menos temporalmente, toda vez que a mediados de 1932 se había eliminado el déficit

de la balanza de pagos. En 1932 las importaciones por volumen alcanzaban apenas un 40 por ciento de la cifra de 1929.

El servicio de la deuda exterior a principios del decenio de 1930 resultó mucho menos difícil que en los primeros años del de 1890. Una de las razones fue que la depreciación del peso provocó la correspondiente contracción de los beneficios en oro o moneda fuerte de las compañías extranjeras, muchas de las cuales, por consiguiente, dejaron de hacer remesas al extranjero con la esperanza de que los tipos de cambio mejorasen con el tiempo. Se calcula que las compañías ferroviarias británicas perdieron así 6 millones de libras esterlinas entre julio de 1930 y julio de 1932. Las remesas aplazadas ayudaron a reducir los déficits de la balanza de pagos y los recursos que se requerían para el servicio de la deuda exterior. Una segunda razón fue que en los primeros años treinta el endeudamiento exterior público siguió siendo ligero en comparación con el de los primeros años del decenio de 1890. Así, de un total de inversiones extranjeras de 4.300 millones de pesos en 1934, sólo 900 millones constituían deudas públicas. Aunque el servicio de la deuda exterior absorbía alrededor de la mitad del total de reservas de oro en 1930-1931, Argentina pudo evitar el incumplimiento del servicio de la deuda exterior.

En Argentina los primeros años de la depresión fueron un período de dislocación más que de derrumbamiento. A pesar de la caída de los precios de las exportaciones, la producción agrícola y los volúmenes de exportación de productos agrícolas no descendieron de forma acusada hasta 1930 y luego se recuperaron hasta alcanzar los niveles de los últimos años veinte. En las ciudades la depresión afectó a los alimentos y las bebidas, las industrias metalúrgicas y las de pequeños enseres domésticos, pero no hizo daño al ramo de la construcción y especialmente a la industria textil. El paro visible siguió siendo notablemente ligero, tal vez entre el 5 y el 6 por ciento. En 1933 el agregado comercial británico en Buenos Aires calculó que el paro alcanzaba sólo el 2,8 por ciento. Un año después su sucesor comentó que «en comparación con el resto del mundo, puede decirse que Argentina no tiene ningún problema grave de paro».[10] Puede que las estadísticas oficiales subestimaran mucho el paro real, sin embargo. No tuvieron en cuenta a las obreras, que representaban quizá una quinta parte del total, y definían el paro, de manera muy engañosa, como porcentaje de la población total en vez de la población activa total.

Aparte de 1930, 1933 resultó el año más riguroso de la depresión, ya que los precios mundiales cayeron en picado hasta sus niveles más bajos desde hacía cuarenta años y ascendían apenas al 50 por ciento de los de 1929. Esto produjo otro grave déficit de la balanza de pagos que obligó al gobierno de Justo a tomar nuevas medidas para hacer frente a la crisis. En 1933 el gobierno se esforzó por fomentar las exportaciones y ayudar a los agricultores y con tal fin estimuló una nueva depreciación del peso, que el año siguiente ya tenía sólo el 60 por ciento de su valor de 1929. Una segunda medida de 1933 amplió el impuesto sobre la renta introducido dos años antes. Como consecuencia de ello, los derechos de importación que habían proporcionado el 54 por ciento de los ingresos en 1930 representaron sólo el 39 por ciento en 1934.

En 1933 el gobierno también modificó el sistema de controles de cambios introducido en 1931. Las disposiciones originales tenían por fin frenar la depreciación del peso y

10. H. O. Chalkley en Department of Overseas Trade, Great Britain, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, Londres, 1933, p. 46; Stanley G. Irving en Department of Overseas Trade, Great Britain, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, Londres, 1935, p. 174.

garantizar la disponibilidad de fondos para el servicio de la deuda exterior En ese momento el gobierno obligó a los exportadores a venderle las divisas extranjeras que obtenían de sus transacciones, que el gobierno luego revendía en subasta pública Las reformas de noviembre de 1933 establecieron un procedimiento de examen para todas las remesas de divisas extranjeras hechas por particulares y se empezó a clasificar las importaciones de acuerdo con una escala de prioridades Recurriendo a la introducción de permisos, las medidas limitaron el número de posibles compradores de divisas extranjeras al gobierno Quienes carecían de permisos tenían que comprar las divisas extranjeras en un mercado libre a precios muy superiores. Con estos cambios el gobierno podía regular no sólo el volumen de las importaciones, sino también su contenido y su origen. Dar a los importadores de artículos británicos muchos más permisos de control de cambios que a quienes deseaban importar artículos norteamericanos, por ejemplo, resultó ser un medio eficaz de encauzar el comercio hacia los artículos británicos

Después de introducir las reformas del control de cambios el gobierno empezó a obtener grandes beneficios de sus operaciones con divisas extranjeras, que en 1940 ya totalizaban alrededor de mil millones de pesos Algunos de estos ingresos ayudaron a atender al servicio de la deuda exterior, pero la mayor parte de ellos se empleó para subvencionar a los productores rurales. Se crearon juntas reguladoras para que administrasen las subvenciones Empezando con la junta de cereales en 1933, pronto se crearon entidades parecidas para la carne, el algodón, la leche y otros productos

Las reformas económicas de finales de 1933 se llevaron a cabo bajo Federico Pinedo, que se convirtió en ministro de Hacienda como sucesor de Alberto Hueyo, figura ortodoxa que había logrado controlar los déficits de la balanza de pagos, frenar el gasto público y evitar el impago de la deuda exterior Pinedo, en cambio, demostró ser imaginativo e innovador, gracias en gran parte a su equipo de consejeros técnicos encabezado por Raúl Prebisch En 1934 Pinedo consolidó la deuda pública, medida que fomentó la bajada de los tipos de interés y desvió las inversiones de los bonos del estado de alto rendimiento Pero el Banco Central, creado en 1934, se convirtió en el gran monumento del ministerio de Pinedo Hasta entonces el sistema bancario había adolecido de una rigidez indebida, con el crédito restringido durante los períodos de recolección, los bancos compitiendo por los empréstitos del Banco de la Nación, entidad privada que cumplía algunas funciones primitivas de banco central y cuyos tipos de interés tendían, por tanto, a subir en vez de a bajar durante los periodos de depresión El Banco Central ofrecía métodos nuevos para regular la economía mediante el control de la oferta monetaria, comprar y vender títulos del estado, redescontar y cambiar las reservas obligatorias El Banco Central vinculó la oferta crediticia al flujo y reflujo de la actividad económica y dio al gobierno mayor control de los tipos de cambios y el comercio exterior. Aunque acabó siendo un instrumento de la financiación mediante déficit, no se había creado con esta intención El grupo de Pinedo creía que el gasto deficitario intensificaría las importaciones y, por tanto, los déficits de la balanza de pagos al tiempo que provocaría inflación.

Las medidas que tomó Pinedo en 1933 y 1934 establecieron muchos de los instrumentos básicos que gobiernos posteriores perfeccionarían y ampliarían al crear una economía centralizada y dirigida El Tratado Roca Runciman de 1933 encarnaba la otra cara, la cara regresiva, de la política económica conservadora durante la depresión El tratado se firmó después de que Gran Bretaña adoptase la preferencia imperial en la conferencia de Ottawa un año antes. La preferencia imperial significaba que Gran Bretaña

procuraría importar tanto como pudiese del imperio al tiempo que excluiría las importaciones procedentes de otros países a cambio de gozar de acceso privilegiado a los mercados imperiales. La preferencia imperial amenazaba a Argentina, porque en Ottawa los ingleses se encontraron ante enérgicas exigencias australianas y sudafricanas de importar carne de estas procedencias a expensas del suministro argentino. Circularon rumores de que Gran Bretaña se proponía aplicar un 5 por ciento de recortes mensuales a las importaciones de carne argentina, reduciendo las compras hasta en un 65 por ciento durante el primer año.

Desde el principio pareció improbable que los ingleses pensaran poner en práctica la propuesta hasta semejante extremo, toda vez que los proveedores imperiales parecían incapaces de incrementar la producción y las exportaciones con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda británica. Al mismo tiempo, reducir las importaciones de carne de Argentina representaba una amenaza en potencia a las exportaciones británicas a Argentina y el riesgo de represalias contra las inversiones y compañías británicas. En 1933 los ingleses buscaban una capacidad negociadora, un medio de obligar a Argentina a comprar más artículos británicos y menos artículos norteamericanos y de corregir la tendencia comercial que había surgido en los años veinte, durante los cuales Argentina había vendido grandes cantidades de artículos a Gran Bretaña mientras aumentaba continuamente las importaciones de Estados Unidos, dejando a Gran Bretaña con un creciente déficit comercial. Durante los primeros años de la depresión también habían irritado a los ingleses las restricciones que los controles de cambios y la depreciación del peso habían impuesto a las remesas de las compañías británicas en Argentina.

El gobierno argentino respondió a la amenaza que pesaba sobre las exportaciones de carne enviando un equipo de negociadores a Londres encabezado por el vicepresidente, Julio A. Roca hijo. En mayo de 1933 Roca y Walter Runciman, presidente de la British Board of Trade,* firmaron un tratado comercial al que a finales de septiembre siguieron un protocolo y un acuerdo sobre aranceles. El tratado especificaba que Gran Bretaña continuaría importando la misma cantidad de carne argentina que había importado de julio de 1931 a junio de 1932, a menos que una nueva caída importante de los precios al consumidor hiciera necesario aplicar nuevas restricciones para salvaguardar los beneficios de los minoristas en Gran Bretaña. Los ingleses accedieron a que las empresas cárnicas de propiedad argentina suministraran el 15 por ciento de las exportaciones de carne a Gran Bretaña, concesión con la que querían responder a las quejas argentinas relativas al consorcio de empresas cárnicas extranjeras. Se arguyó que permitir las exportaciones de carne de frigoríficos que eran de propiedad en régimen de cooperativa de los ganaderos ayudaría a mantener los beneficios de éstos. Finalmente, Gran Bretaña se comprometió a no imponer derechos arancelarios a las importaciones de cereales argentinos.

Dado que Gran Bretaña no importaba cereales argentinos en grandes cantidades, el tratado estaba relacionado principalmente con la carne de buey y equivalía a un acuerdo de mantener las importaciones de dicha carne en los niveles relativamente bajos de 1931-1932. A cambio, sin embargo, Argentina accedió a reducir los derechos sobre casi 350 importaciones británicas al nivel que tenían en 1930, antes de los aumentos arancelarios que decretó el gobierno de Uriburu, y abstenerse de imponer derechos a artículos tales como el carbón, que hasta el momento se habían librado de los aumentos arancelarios. Además, Gran Bretaña consiguió que Argentina estuviera de acuerdo con que las reme-

* Ministerio de Comercio británico. (*N. del T.*)

sas de las compañías británicas se pagaran por medio de deducciones de las ganancias de exportación argentinas a Gran Bretaña, a partir de ahora cualquier remesa que permaneciera «bloqueada» en Argentina se trataría como empréstito con intereses. En el Tratado Roca-Runciman Argentina se comprometió a dispensar un «trato benévolo» a las compañías británicas, ofreciéndoles condiciones favorables para adquirir importaciones bajo las disposiciones de control de cambios. El tratado eximía a las compañías ferroviarias británicas de contribuir a los recién creados planes de pensiones para sus trabajadores. El tratado no especificaba nada sobre los transportes marítimos y, por tanto, dejaba la mayor parte del comercio anglo-argentino en manos de los expedidores británicos, dando a los ingleses una parte casi exclusiva de las ganancias invisibles obtenidas del comercio.

El Tratado Roca-Runciman permitió a Argentina mantener las exportaciones de carne en el nivel de 1931-1932, pero poco más. Resultó que las concesiones a las cooperativas cárnicas locales no significaban nada, ya que los expedidores británicos evitaban comerciar con ellas, y como no podían encontrar barcos, las cooperativas sólo podían desarrollar sus actividades en el mercado nacional. Gran Bretaña, en cambio, recuperó las condiciones para el comercio de que gozaba antes de la depresión. Como los ingleses también obtuvieron acceso preferencial a las escasas divisas extranjeras, se hicieron con lo que equivalía al dominio del comercio con Argentina, protegido ahora por un tratado, que tenían antes de 1914. Los ingleses obtuvieron condiciones muy favorables para hacer remesas, incluida la protección contra la futura devaluación del peso. El Tratado Roca-Runciman también representó un duro golpe para Estados Unidos. Los importadores de mercancías norteamericanas estaban obligados ahora a superar el muro de los aranceles creado en 1930 y comprar caras divisas extranjeras en el mercado libre de cambios.

Pensado al principio para que estuviera en vigor durante tres años, el Tratado Roca-Runciman se renovó y prorrogó en 1936. En esta ocasión los ingleses obtuvieron una autorización para cobrar nuevos impuestos sobre la carne importada de Argentina. A cambio de reducir las tarifas de carga, las compañías ferroviarias británicas recibieron condiciones aún más favorables para hacer remesas. Se les prometió que no se concedería a los ferrocarriles estatales tarifas subvencionadas que fuesen más baratas que las británicas, y que se reduciría la construcción de carreteras que quitasen tráfico a los ferrocarriles.

A pesar de todas las concesiones por parte de Argentina en 1933 y 1936, Gran Bretaña hizo poco más que proteger el comercio que ya tenía en el decenio de 1930. Aunque las exportaciones norteamericanas descendieron vertiginosamente, la parte británica, que ascendía a poco menos del 20 por ciento en 1927, siguió siendo inferior al 24 por ciento durante todo el decenio de 1930. Además, aunque Gran Bretaña había conseguido condiciones mejores para las remesas desde Argentina, las ganancias totales de las compañías británicas descendieron de manera acusada durante la depresión, de tal modo que los beneficios siguieron estando muy por debajo de los niveles del decenio de 1920. En 1929-1935 los tonelajes transportados por los ferrocarriles británicos cayeron en un 23 por ciento, pero los ingresos disminuyeron en un 40 por ciento. La mitad de los inversores británicos que tenían acciones en los ferrocarriles argentinos no cobró dividendos durante el decenio de 1930; la cotización media de las acciones de las compañías ferroviarias en 1936, por ejemplo, apenas alcanzaba el 10 por ciento de la de finales de los años veinte. Como ilustración de los apuros financieros de los ferrocarriles británicos, en 1937 la compañía Central Córdoba ofreció voluntariamente su propia expropiación por parte del gobierno y su incorporación a las líneas del estado.

Las dificultades financieras de las compañías ferroviarias británicas fueron resalta-

do no sólo de la depresión sino de la creciente competencia del transporte por carretera. Durante todo el decenio de 1920 Argentina había importado gran número de automóviles, autobuses y camiones, la mayoría de ellos de Estados Unidos. En 1932, a pesar de la encarnizada oposición de los ferrocarriles, el gobierno de Justo puso en marcha un programa de construcción de carreteras. La mayoría de estas carreteras nuevas se construyó en el litoral, donde competían directamente con los ferrocarriles británicos. El crecimiento del nuevo tipo de transporte se hizo todavía más conspicuo en las ciudades, donde los anticuados tranvías británicos hacían frente a un desafío cada vez mayor por parte de los autobuses llamados «colectivos», que resultaban invariablemente más baratos, más rápidos y más flexibles. En 1929 los tranvías ganaron 43 millones de pesos, pero en 1934 sólo 23 millones. En 1935, mientras se empezaban las negociaciones preliminares para renovar el Tratado Roca-Runciman —momento que juzgó propicio para actuar— la mayor de las compañías de tranvías británicas en Buenos Aires, la Anglo Argentine, presentó un plan al gobierno para poner los servicios de transportes de la ciudad bajo una sola entidad, la Corporación de Transportes.

Crear la Corporación de Transportes equivalió a un complot apenas disimulado cuyo objetivo era someter los colectivos al control de los tranvías, que entonces procederían a destruirlos. Según las disposiciones del plan, todas las partes que prestaran servicios de transporte en la ciudad serían obligadas a formar parte de la Corporación, donde recibirían acciones y derecho a voto de acuerdo con la magnitud de su activo de capital. Los tranvías dominarían el transporte ciudadano, dado que los colectivos eran con frecuencia empresas muy modestas que dependían en gran medida de los créditos. En 1935 la Anglo-Argentine Tramway Company pidió también que se garantizase a la Corporación de Transportes un beneficio mínimo de 7 por ciento, el tipo de subvención que se había utilizado mucho antes de 1890 para atraer inversiones británicas a Argentina. Como temía las represalias contra las exportaciones de carne al acercarse el momento en que había que renovar el Tratado Roca-Runciman, el gobierno de Justo se sintió obligado a mostrarse de acuerdo con que se crease la Corporación, a pesar de la fuerte oposición tanto de los «colectiveros» como de los consumidores capitaneados por el Partido Socialista. Pero después de mostrarse de acuerdo, el gobierno no hizo nada por poner el plan en práctica. Evitó todo intento de obligar a los colectivos a entrar en la Corporación y denegó repetidamente la subida de las tarifas que pedían los tranvías. En este asunto el gobierno de Justo logró vencer a los ingleses, aunque simultáneamente sufría graves daños políticos, a manos de Lisandro de la Torre, a causa del asunto del consorcio de las empresas cárnicas.

En 1934 el crecimiento económico ya se había reanudado en Argentina y la recuperación continuó a ritmo acelerado durante los últimos años treinta, exceptuando la recesión que en 1937-1938 causó la mala cosecha. Los cereales impulsaron la recuperación de mediados del decenio de 1930. En 1936-1937 Argentina registró el mayor volumen de exportación de cereales de su historia, mientras los agricultores obtenían un incremento de más del 20 por ciento de los precios sobre 1933. En 1937 Argentina seguía ocupando el séptimo lugar entre los productores mundiales de trigo y el segundo entre los exportadores, también produjo la mitad de la linaza del mundo. La devaluación del peso en 1933, que impulsó las exportaciones de cereales durante los años siguientes, causó mucha inflación, el coste de la vida en Buenos Aires subió alrededor de un 25 por ciento entre mediados de 1934 y mediados de 1936, momento en que la inflación fue síntoma de la recuperación económica. El alza de los precios contribuyó a fomentar el auge

de la construcción en Buenos Aires a finales de los treinta. En 1939, después de varios años de subida del gasto público y un aumento del 20 por ciento sólo en 1939, Argentina tenía un déficit presupuestario que equivalía al 2 por ciento del PIB.

Durante los primeros años treinta la industria manufacturera estuvo deprimida junto con el resto de la economía, aunque la baja había sido menos grave que en otros sectores. Luego la manufacturación se recuperó rápidamente y a partir de mediados del decenio de 1930 empezó a dejar atrás a todos los otros sectores y su tasa de crecimiento fue el doble de la correspondiente a la agricultura. Varias condiciones favorecieron el crecimiento industrial durante los años treinta. Los aranceles, el comercio bilateral, los controles de cambios y las devaluaciones restringieron las importaciones y distorsionaron su composición al hacer que los productores del país fuesen más competitivos en el mercado nacional. Durante todo el decenio de 1930 los fabricantes argentinos pudieron adquirir maquinaria de segunda mano a precios rebajados de empresas industriales extranjeras que habían quebrado. La mano de obra barata era cada vez más abundante como consecuencia de la migración del campo a la ciudad.

El censo de 1914 había contado 383.000 trabajadores «industriales». En 1935 eran 544.000, en 1941 el número había subido hasta 830.000, y en 1946 superaba el millón. En los primeros años cuarenta el sector manufacturero producía diversos artículos, entre los que destacaban los textiles y los alimentos en conserva, seguidos de los productos químicos, los metales y el cemento. La mayoría de las industrias fabricaba productos acabados para el consumo. La inexistencia de industria pesada reflejaba la limitación de las reservas nacionales de materias primas básicas como el carbón y el mineral de hierro y las deficiencias de la red de comunicaciones, que seguía siendo mucho más favorable a las exportaciones agrícolas. Las escaseces crediticias también impidieron un desarrollo industrial más diverso. Aparte de todo esto, los fabricantes argentinos a veces se comportaban más como especuladores que como empresarios e inversores a largo plazo. Con frecuencia parecían creer que la manufacturación podía dar beneficios a corto plazo con una inversión mínima, pero no era posible confiar en ella a un plazo más largo excepto en muy pocos casos. Estas actitudes se derivaban en parte de los recuerdos de los años de la guerra y la posguerra inmediata. La industria había florecido en 1914-1918, pero luego se había derrumbado al reanudarse las importaciones después de la contienda. Durante los años treinta predominaban expectativas parecidas: sólo la depresión impidió que se reanudaran las importaciones, y cuando la depresión pasara, la competencia extranjera volvería a estrangular a los fabricantes locales. Todas estas condiciones ayudaron a preservar la mayoría de las unidades industriales como empresas pequeñas en las que se invertía poco. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las «empresas industriales» tenían diez empleados o menos, y el 75 por ciento menos de cincuenta. En 1935 dos tercios de la industria abarcaban los alimentos y las bebidas y los textiles. Sin embargo, al lado de estas empresas pequeñas, que eran numerosas, había un puñado de empresas muy grandes cuya envergadura se derivaba del monopolio y de la abundancia de materias primas baratas. Entre ellas estaban el gran consorcio Bemberg, que dominaba la industria cervecera, Torcuato di Tella, cuya compañía, Sociedad Industrial Americana de Maquinarias (SIAM), producía diversos aparatos con licencia estadounidense, y Miguel Miranda, que de pobre había pasado a ser el gigante de los alimentos en conserva y a finales del decenio de 1940 se convirtió, bajo Perón, en el principal planificador de la economía argentina. Los extranjeros seguían ocupando una posición prominente en la manufacturación argentina, como antes de 1914. Parte de la súbita acelera-

ción del crecimiento industrial a finales del decenio de 1930, por ejemplo, tenía su origen en la oleada de refugiados judíos que llegaron con el capital que pudieron recuperar cuando los nazis extendieron su dominio sobre la Europa central. Otro rasgo notable del sector manufacturero en Argentina fue su abrumadora concentración en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores más próximos. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las empresas industriales, el 70 por ciento de los trabajadores industriales y alrededor del 75 por ciento de los salarios industriales estaban en Buenos Aires.

Algunas de las industrias que registraron expansión en los años treinta y cuarenta, en particular la textil y la de alimentos elaborados, existían desde hacía una generación o más. Entre las que producían artículos novedosos, como bombillas eléctricas y neumáticos de caucho, había varias que nacieron como filiales, en su mayor parte de compañías norteamericanas. Los exportadores estadounidenses crearon empresas en Buenos Aires debido a los aranceles elevados y al uso discriminatorio de los controles de cambios después de 1933. Aunque las inversiones estadounidenses en su conjunto disminuyeron durante la depresión y la guerra, las inversiones privadas en estas filiales manufactureras aumentaron en 30 millones de dólares norteamericanos entre 1933 y 1940. A finales del decenio de 1930 se fundaron catorce filiales de compañías estadounidenses que daban empleo a un total de catorce mil trabajadores.

Con todo, en los años treinta la industria principal era la textil, que continuó creciendo durante los primeros años del decenio, aunque la manufacturación en conjunto se contrajo. El número de fábricas textiles aumentó de veinticinco a treinta entre 1929 y 1934, y los trabajadores empleados en ellas pasaron de ser ocho mil a doce mil. En 1930 los productores textiles del país satisfacían sólo el 9 por ciento del consumo total. En 1940 la participación de los productores nacionales en el mercado aumentó en casi la mitad, y en 1943, al caer vertiginosamente las importaciones a causa de la guerra, subió hasta más de cuatro quintas partes. A mediados de los treinta Argentina pasó a ser autosuficiente en tejidos de algodón y en los números más bastos de hilo de algodón. Asimismo, se creó una industria sedera. Durante los años treinta y cuarenta los textiles alcanzaron una tasa de crecimiento anual del 11 por ciento, comparada con la de alrededor del 6 por ciento del total de las manufacturas.

Durante todo este período los productores textiles disfrutaron de condiciones excepcionalmente favorables. La primera entre ellas era la abundancia de lana, ya que las exportaciones de este producto se derrumbaron durante la depresión. Los textiles de lana representaron alrededor de tres cuartas partes de la producción total hasta finales del decenio de 1930. Ya en 1934 varios fabricantes de lana bonaerenses trabajaban para servir pedidos recibidos con doce meses de antelación. Simultáneamente, la producción de algodón en rama aumentaba con rapidez, dado que la tierra dedicada a su cultivo pasó de 10.449 hectáreas en 1924 a 28.593 en 1934 y 33.696 en 1940. Los pequeños agricultores de la provincia del Chaco en el lejano norte, la mayoría de ellos cerca de la ciudad de Resistencia, suministraban más de las cuatro quintas partes de algodón en rama. En 1933 el gobierno introdujo una subvención para los cultivadores de algodón que se financiaría con los beneficios obtenidos del control de cambios, y esta «junta de algodón», una de las juntas reguladoras de Pinedo, ayudó a que la producción continuase creciendo. Además de acceso a materias primas baratas, los textiles gozaban de otras ventajas. Las medidas que se tomaron durante la depresión —subida de los aranceles, controles de cambios y devaluaciones— tendían o bien a reducir las importaciones de textiles o a cambiar los precios relativos de los artículos nacionales y las importaciones. El Tratado Roca-Runci-

man, por ejemplo, ayudó a reducir la afluencia de textiles más baratos procedentes de países como Japón e Italia a favor de mercancías británicas relativamente caras, lo cual incrementó la ventaja competitiva de los productores locales. Mientras que las condiciones de la oferta cambiaron, la demanda de productos textiles siguió siendo relativamente constante e inelástica, y al caer las importaciones aumentaron los beneficios de los productores locales, lo cual estimuló la producción. Al igual que el resto de las manufacturas, la industria textil se benefició de la creciente abundancia de mano de obra barata y se convirtió en tal vez el mayor patrono de mujeres. También benefició a la industria la práctica de requisar maquinaria barata de segunda mano procedente del extranjero; el número de husos de algodón, por ejemplo, se multiplicó por cinco en 1930-1936. Entre todas estas condiciones favorables, la más importante fue la facilidad de obtener materias primas baratas. Otros sectores de la manufacturación, como la metalurgia, que siguieron dependiendo de materias primas importadas, crecieron a un ritmo más lento durante los años treinta en comparación con los veinte. La nueva industria textil tenía los mismos rasgos generales que la industria en general. En 1936 funcionaban unas 225 empresas, pero las diez principales empleaban a casi la mitad de la población activa total.

La migración en masa del campo a las ciudades acompañó la subida de la manufacturación. La migración interna no empezó durante el decenio de 1930, pero su ritmo se aceleró. Después de aportar una media de alrededor del 5 por ciento al crecimiento de Buenos Aires y sus barrios periféricos entre 1914 y 1935, la parte correspondiente a los inmigrantes aumentó hasta el 37 por ciento en 1937-1947, lo cual reflejaba también el marcado descenso de la tasa de inmigración extranjera durante los años treinta y cuarenta. Entre 1937 y 1943 una media de 70.000 inmigrantes entraron en la ciudad de Buenos Aires y sus barrios periféricos cada año, pero en 1943-1947 la tasa subió hasta 117.000. La migración desempeñó un papel importante en el sostenimiento de la expansión de Buenos Aires, cuya población, 1,5 millones en 1914 y 3,4 millones en 1936, había crecido hasta cifrarse en 4,7 millones en 1947. Estudios recientes de la migración interna han tratado de evaluar el movimiento de salida del campo, en contraposición a las añadiduras a la población urbana. Estas cifras sugieren no sólo que la tasa de movilidad fue mucho más alta de lo que habían indicado cálculos anteriores, sino también que la migración empezó a aumentar de forma acentuada durante los primeros años de la depresión en lugar de a finales del decenio de 1930. No obstante, nadie ha discutido la anterior opinión de que la migración se intensificó durante los años cuarenta y después. Los cálculos de Alfredo E. Lattes, por ejemplo, indican que el número de personas que abandonaron las zonas rurales fue de 185.000 durante el quinquenio 1930-1934, 221.000 entre 1935 y 1939 y 446.000 en 1940-1944. Durante la totalidad de los decenios de 1930 y 1940 casi dos tercios de los inmigrantes procedían de la región de las pampas, y principalmente de la provincia de Buenos Aires, en lugar del interior. Lattes calcula que el Gran Buenos Aires atrajo 1,1 millones de inmigrantes entre 1935 y 1947, de los cuales dos tercios procedían de las provincias de las pampas y Mendoza. A comienzos del decenio de 1950 las cosas cambiaron mucho, pero antes de entonces, al parecer, la mayor parte de la migración se producía entre lugares separados por distancias relativamente cortas y era frecuente que consistiera primero en un movimiento del campo a las pequeñas ciudades adyacentes seguido de otro movimiento hacia la zona metropolitana.

1. Alfredo E. Lattes, «La dinámica de la población rural en la Argentina», *Cuadernos del CENEP*, nº 3 (1979).

La manufacturación atraía personas a la ciudad, las condiciones de la agricultura las expulsaban del campo. La depresión afectó a una sociedad agraria cuyos rasgos básicos habían cambiado poco durante la generación anterior. En las pampas la población rural aún la integraban principalmente arrendatarios y jornaleros que se empleaban en grandes estancias en condiciones que con frecuencia hacían que su vida fuese extremadamente insegura. La tenencia de la tierra apenas había cambiado desde 1914. En la provincia de Buenos Aires poco más de 300 familias poseían una quinta parte de la tierra, y sólo 3.500 familias, la mitad de la tierra. Tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, las dos principales provincias de las pampas, grandes estancias de más de 1.000 hectáreas abarcaban dos tercios de la tierra. Un censo agrícola de 1937 reveló que sólo 20.000 terratenientes, en una población rural total de alrededor de 1,5 millones, poseían el 70 por ciento de la tierra pampeana. Durante los primeros años treinta los terratenientes que se veían amenazados por la depresión habían constituido sociedades mercantiles para atraer nuevo capital e impedir la enajenación o subdivisión de sus propiedades.

Durante los primeros años de la depresión el gobierno hizo algunos esfuerzos por mejorar las condiciones para la población agrícola, en particular los arrendatarios. En 1932 diversas leyes establecieron contratos mínimos de cinco años para los arrendatarios e insistieron en que se reembolsara a éstos el importe de las mejoras que hicieran en las tierras que labraban. En 1933, al caer en picado los precios agrícolas en los mercados internacionales, el gobierno impuso una moratoria a las deudas de los agricultores. A menos que se encontraran con que sus arrendamientos subían, los agricultores también obtuvieron cierta protección de la depreciación del peso después de 1929 y de las subvenciones que concedía la junta de cereales. Al menos desde el punto de vista de la producción, estas medidas ayudaron a mantener la producción agrícola, que continuó subiendo hasta llegar a la cosecha sin precedentes de 1937.

Sin embargo, había otras señales de que los agricultores seguían descontentos y su posición era incierta. En el decenio de 1930 los arrendatarios agrícolas todavía sufrían a causa de una condición que los observadores no habían dejado de criticar durante los últimos cincuenta años: el crédito seguía siendo insuficiente y aún procedía en gran parte de los tenderos locales (pulperos), que a menudo eran rapaces, en vez de los bancos agrícolas; los agricultores carecían de instalaciones para almacenar sus cereales y, por tanto, tenían que desprenderse de sus cosechas a medida que iban recogiéndolas, lo cual provocaba la caída de los precios; también seguían dependiendo de los ferrocarriles para el transporte y de la buena voluntad de los exportadores de cereales de Buenos Aires, el monopolio de los llamados «Cuatro Grandes». La mayor de las grandes empresas exportadoras de cereales, Bunge y Born, exportaba ahora casi una tercera parte de la cosecha total y hacía de intermediaria en la financiación de la mitad de los cereales del país entre el momento de la recolección y el de la exportación. Sólo dos empresas se encargaban de casi tres cuartas partes de todos los envíos de cereales. En el campo la continuada práctica de arrendamiento temporal y la dependencia de los trabajadores estacionales fomentaban la debilidad de las estructuras familiares, una baja tasa de nupcialidad, una tasa también baja de natalidad y una tasa elevada de ilegitimidad.

Estas adversidades acosaban a los agricultores desde hacía decenios. Pero en los años treinta había indicios de que las condiciones iban a peor. A medida que más y más estancias se constituían en sociedades mercantiles, creció el ausentismo de los terratenientes, que era otra queja perenne de los agricultores. Las relaciones entre los terratenientes y los arrendatarios se hizo todavía más impersonal, y los vínculos paternalistas

que a veces los habían unido disminuyeron. A pesar de las leyes de 1932, la mayoría de los arrendatarios continuaban trabajando sin contratos por escrito, y, a pesar de las escaseces de importaciones durante la depresión, la agricultura siguió mecanizándose, y el número de cosechadoras aumentó de 28.600 en 1930 a unas 42.000 en 1940. La creciente mecanización disminuyó la necesidad de trabajadores estacionales y tendió a causar la desaparición de los pequeños agricultores marginales. En 1934 el agregado comercial británico hizo referencia al «creciente número de vagabundos [que son] motivo de grave preocupación para los propietarios de campamentos y para las compañías ferroviarias».[12] Los agricultores sufrieron su mayor golpe después de mediados de 1940 con el derrumbamiento de las exportaciones agrícolas durante la guerra. Pero incluso antes de 1940 indicios al menos fragmentarios sugerían el aumento de las diferencias entre los ingresos del campo y los de la ciudad, posible causa de la migración interna.

El auge del nacionalismo

Durante el decenio de 1930 la política argentina empezó a experimentar los cambios y realineamientos que culminarían con la subida de Perón al poder. De las nuevas corrientes políticas de este período, el nacionalismo se convirtió en la más central e importante. Las raíces del nacionalismo eran complejas y se remontaban a principios del siglo XIX, pero la súbita proliferación de ideas nacionalistas después de 1930 acompañó a la depresión. El nacionalismo surgió como fuerza ideológica importante en 1934 con la publicación de *La Argentina y el imperio británico. Los eslabones de una cadena, 1806-1933*, de Rodolfo y Julio Irazusta. Este libro atacaba la mentalidad de la clase gobernante liberal-conservadora que tantas concesiones había hecho, según afirmaban los Irazusta, en el Tratado Roca-Runciman, empujada por una gratitud y lealtad inmerecidas a Gran Bretaña por el apoyo británico durante la lucha por la independencia. Los Irazusta rechazaban esta idea por considerarla un mito: si Gran Bretaña había apoyado alguna vez el movimiento independentista, había sido sólo para captar a Argentina como mercado comercial y de inversiones y para establecer una nueva forma de dominación colonial que substituyera la de España.

Dentro del movimiento nacionalista en general aparecieron dos corrientes distintas que Perón uniría más adelante. La primera de ellas era la corriente nacionalista popular que había aflorado a la superficie por primera vez durante las campañas a favor de la nacionalización del petróleo a finales de los años veinte. La campaña aspiraba a extender el control del estado sobre materias primas como el petróleo y excluir a los extranjeros, cortando así la salida de riqueza que el control extranjero supuestamente inducía y potenciando nuevos campos de empleo. En 1935 el tipo de nacionalismo yrigoyenista reapareció en una pequeña organización de radicales jóvenes llamada Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA). La FORJA encarnaba sobre todo dos principios: la democracia popular («La historia de Argentina —declaraba su primer manifiesto en junio de 1935— demuestra la existencia de una lucha permanente del pueblo por la soberanía popular») y el antimperialismo («Somos una colonia; queremos una Argentina libre»).[13]

12. Véase Chalkley, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, 1935, p. 174.

13. Citado en Arturo Jauretche, «De FORJA y la década infame», en Alberto Ciria, ed., *La década infame*, Buenos Aires, 1969, p. 91.

Durante un decenio, hasta que muchos de sus miembros la abandonaron para unirse a Perón en 1945, la FORJA fue uno de los principales agentes irritantes para Alvear dentro del radicalismo. Los «forjistas» intensificaron la anglofobia que los Irazusta habían contribuido a crear. En su muy leída obra *Ferrocarriles Argentinos*, publicada en 1940, Raúl Scalabrini Ortiz, miembro marginal de la FORJA, calificaba a las compañías ferroviarias británicas de explotadoras corruptas y agentes de la dominación colonial británica. Durante la segunda guerra mundial el antiimperialismo condujo a la FORJA a una acérrima defensa de la neutralidad contra la postura a favor de los aliados que adoptaron Alvear y la mayoría de los otros radicales. Pero aunque sus campañas fueron poderosas y eficaces, la FORJA tenía sus limitaciones como movimiento antiimperialista con todas las de la ley. Sus preocupaciones y objetivos primordiales eran traspasar las propiedades o los recursos controlados por extranjeros a nativos. Al igual que los radicales en general, la FORJA tendía a pasar por alto los asuntos más hondos y en última instancia más difíciles como la industria y la reforma social, y su papel principal, totalmente en consonancia con la tradición radical, era promover los intereses de la clase media «estatista» que los radicales representaban.

El nacionalismo, movimiento de la extrema derecha cuyos orígenes y contenido eran más complejos que los de la FORJA, se convirtió en la segunda corriente nacionalista del decenio de 1930. Al principio los nacionalistas comprendían el pequeño grupo de partidarios civiles de Uriburu en 1930-1932 que había apoyado su intento de reformar el sistema de representación en el Congreso y crearon grupos paramilitares como la Legión Cívica. Hasta cierto punto el nacionalismo era un eco del federalismo del siglo XIX. Sus miembros detestaban Buenos Aires como agente de dominación interna sobre las provincias y como símbolo de «materialismo corrupto», al tiempo que idealizaban las provincias, las zonas rurales y sus habitantes porque, a su modo de ver, encarnaban las virtudes que los nacionalistas consideraban característicamente hispánicas y argentinas. Durante su período de formación antes de 1930 había sido un movimiento principalmente literario y luego había asimilado varias influencias ultraconservadoras de Europa, las más importantes de las cuales eran el clericalismo español y las doctrinas de Charles Maurras, el monárquico francés. Estas influencias europeas dieron forma a sus ingredientes básicos, el antiliberalismo y el anticomunismo. En el corazón del nacionalismo residía el convencimiento de que el liberalismo y la democracia popular representaban un mero preludio del comunismo. Un sistema político liberal, según declaró Roberto de Laferrère, uno de los principales nacionalistas de los años treinta, «permite toda clase de propaganda sediciosa. Una poderosa organización comunista ha surgido entre nosotros... La democracia nos entrega desarmados a estas fuerzas del socialismo extremo y la anarquía».[14]

Los enemigos de los nacionalistas atacaban las exageraciones infundadas y la paranoia que había debajo de esta clase de declaraciones y tachaban a los nacionalistas de «fascistas criollos». De hecho, en el movimiento había muchos elementos e imitaciones fascistas. Sus miembros veneraban la dictadura en los mismos términos que Mussolini («impulsar acciones... silenciar la disensión... hacer trabajos constructivos») y rendían culto a la voluntad, la intuición y la virilidad, buscando la «grandeza de la vida... mediante un salto a la disciplina esforzada».[15] Al igual que el fascismo, el nacionalismo se

14. Ibarguren hijo, *Laferrère*, pp. 69-70.
15. Véase Comisión de Estudios, *El nacionalismo*, pp. 110-111.

encontraba a gusto llevando a cabo cruzadas contra antitipos míticos. Consideraba que tanto el liberalismo como el comunismo eran de origen judío y sostenía que los judíos controlaban simultáneamente el capitalismo mundial y el proletariado revolucionario del mundo. Típico de lo que escribían los nacionalistas fue el ataque contra el «nihilista judío, el explotador pero también el director secreto del proletariado mundial ... el judío sin Dios y sin nación que se está infiltrando en las mentes de nuestros jóvenes proletarios».[16]

Durante todo el decenio de 1930 los nacionalistas encabezaron ataques contra destacadas familias judías, cuyos trapos sucios sacaban al sol. Estos ataques quedaron íntimamente asociados con su creencia dogmática de que en Argentina la ciudad explotaba al campo, toda vez que en la propaganda nacionalista el urbanismo era con frecuencia sinónimo del judaísmo. Ejemplos típicos de sus campañas antisemitas fueron las denuncias del monopolio de las casas exportadoras de cereales de Buenos Aires, la mayoría de las cuales eran propiedad de judíos. Los nacionalistas no eran en modo alguno los únicos que atacaban dichas empresas, ya que desde hacía mucho tiempo éstas eran blanco favorito de todos los que apoyaban a los agricultores. Pero los nacionalistas destacaron de los demás por su racismo violento. Los Bemberg, que eran judíos, fueron otro de sus blancos principales; los nacionalistas sostenían que el cabeza de la familia Bemberg, Otto, había maniobrado para hacerse con el monopolio de la industria cervecera y había utilizado los beneficios para acaparar tierras de agricultores y estancieros arruinados cuyas hipotecas habían sido ejecutadas.

Así pues, había en el nacionalismo ecos de la Italia fascista y algunos de la Alemania nazi, unidos a un ruralismo místico y una defensa agresiva de los intereses ganaderos más pequeños y los peones que dependían de ellos. En otros aspectos el nacionalismo apareció como vástago del conservadurismo español y como una versión más débil del movimiento nacionalista español que hizo la guerra civil bajo Franco. En los primeros años treinta Argentina vivió un renacimiento del catolicismo que alcanzó su apogeo durante el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires en 1934. En ese momento sacerdotes radicales y católicos laicos llegaron a ejercer un papel dominante en el movimiento y a dar forma a sus ideas centrales. En el corazón del nacionalismo había un concepto orgánico de la sociedad que tenía sus raíces en la antigüedad y en el escolasticismo católico. Al igual que el manifiesto que Uriburu había publicado en 1932, los nacionalistas consideraban que la misión del gobierno era servir al «público» o al «bien común» y definían la sociedad humana en los términos espirituales y corporativistas que constituían el núcleo del catolicismo conservador, rechazando el liberalismo porque trataba a la humanidad en términos falsamente individualistas y el comunismo por su ateísmo y su materialismo.

Pero la gran peculiaridad del nacionalismo que explica en gran parte su importancia después de 1940 era que yuxtaponía las actitudes más reaccionarias y un compromiso con la reforma progresista. Entre las principales influencias que recibió el nacionalismo se encontraban las encíclicas pontificias de 1891 y 1931, *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno*. Ambos documentos contenían ataques encarnizados contra el liberalismo y el socialismo, pero también planteaban el asunto de la «justicia social», esto es, un mejor ordenamiento de las relaciones entre las clases sociales para llevar a buen término la antiquísima búsqueda católica de una «sociedad armoniosa», orgánica. A mediados de los años treinta, mientras despotricaban contra los «liberales» y los «comunistas», los

16. Federico Ibarguren, *Orígenes del nacionalismo argentino. 1927-1937*, Buenos Aires, 1969, p. 398.

nacionalistas proclamaban su preocupación por la clase obrera y la reforma social. «La falta de equidad —declaró La Voz Nacionalista— de bienestar, de justicia social, de moralidad, de humanidad, ha convertido el proletariado en un animal de carga... incapaz de disfrutar de la vida o de los avances de la civilización».[17] En 1937 uno de los grupos antisemitas más estridentes, la Alianza de la Juventud Nacionalista, sumó las exigencias de que se prohibiera la inmigración de judíos y se expulsara a los que ocupaban cargos públicos no sólo a la «justicia social» sino a lo que calificó de reforma agraria «revolucionaria» para acabar con la «oligarquía». Los nacionalistas destacaban entre los primeros en proponer la industrialización y la nacionalización de los servicios públicos de propiedad extranjera. Ya en 1931 propusieron que se creara una industria nacional del acero. En 1932 uno de sus periódicos atacó la Unión Telefónica, que era de propiedad norteamericana, tachándola de «empresa extranjera que monopoliza un servicio público y que debería haberse nacionalizado hace ya algún tiempo».[18]

El nacionalismo no era un «partido» político, designación que sus miembros rechazaban totalmente porque la palabra «partido» implicaba la proposición liberal de que un mero segmento de la comunidad podía mantener una identidad distinta de la sociedad en general. «Los partidos», según los nacionalistas, «escinden» una entidad indivisible: la nación. Igualmente, los nacionalistas se negaban a tomar parte en todas las elecciones, toda vez que consideraban que las prácticas electorales eran otro derivado del liberalismo. Durante todo el decenio de 1930 el movimiento consistió en una docena y pico de facciones que a menudo competían y se peleaban unas con otras y al frente de las cuales había miembros de la intelectualidad cuyas principales actividades eran difundir propaganda, celebrar mítines públicos y organizar esporádicas manifestaciones callejeras. Al finalizar el decenio, además de la publicación de numerosos periódicos y revistas, los nacionalistas ya habían recurrido al «revisionismo histórico», la reescritura de la historia argentina para atacar lo que para ellos era la visión histórica tergiversada de los liberales, los héroes de la historiografía liberal, los ingleses, y sobre todo para rehabilitar la figura de Juan Manuel de Rosas como el gran modelo del liderazgo político al que aspiraban. «Es una vil mentira —declaró Marcelo Sánchez Sorondo— que debamos nuestra existencia histórica al liberalismo. Al liberalismo sólo le debemos la entrega de nuestras tierras fronterizas, y el tutelaje de los extranjeros».[19] Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, en cambio, eran ejemplos de la «colaboración de cada uno de los elementos de la sociedad, el líder, la minoría ilustrada y la masa».[20] Por tanto, poco después de 1930 los nacionalistas habían renunciado a la aspiración uriburista a la «democracia verdadera» por un compromiso con el corporativismo autocrático bajo un líder militar. A pesar de este cambio, el gobierno seguía teniendo la obligación de promover tanto el «bien común» como la «justicia social».

Durante los años treinta estas sectas derechistas empezaron a tener una influencia muy superior a la que correspondía a su importancia numérica, pues eran sólo varios centenares de activistas. Los nacionalistas interpretaron un papel importante en la formación del incipiente movimiento antiimperialista, que iba encontrando partidarios no sólo en la derecha, sino también en la izquierda y el centro. El antiimperialismo argenti

17. La Voz Nacionalista, *El nacionalismo argentino*, Buenos Aires, 1935, p. 5.
18. *Crisol*, 21 de febrero de 1932.
19. Marcelo Sánchez Sorondo, *La revolución que anunciamos*, Buenos Aires, 1945, p. 35.
20. Véase Tulio Halperín Donghi, *El revisionismo histórico argentino*, Buenos Aires, 1971, p. 14.

no creció sobre una red de teorías relativas a conspiraciones del tipo que era fundamental para las tácticas y técnicas políticas de la ultraderecha. En gran parte de la propaganda antiimperialista, por ejemplo, los ingleses y, más adelante, los norteamericanos eran vistos en términos muy parecidos al concepto que los nacionalistas tenían de los judíos, como fuerzas conspiratorias encubiertas y malévolas. Así, Raúl Scalabrini Ortiz, supuesto izquierdista, criticó a los ingleses empleando los mismos términos y el mismo vocabulario que aparecían en uno de los folletos antisemitas de los nacionalistas: «Tenemos entre nosotros un enemigo que ha alcanzado la dominación mundial por medio de la astucia y la habilidad de sus maniobras indirectas, por medio de sus actos de mala fe, por medio de sus constantes mentiras».[21]

En el decenio de 1930 el movimiento nacionalista siguió siendo principalmente civil y, a pesar de las actividades de Molina, Kinkelín y un puñado de otros correligionarios, aún no había conseguido penetrar mucho en el ejército.

Argentina en vísperas de la segunda guerra mundial

Poco antes de la segunda guerra mundial, Argentina se encontraba más o menos en la misma posición próspera y prometedora de la que gozara en vísperas de la primera. Sólo la reciente expansión del Buenos Aires industrial y la creciente salida de población de las pampas ofrecían un contraste notable con las circunstancias de treinta años antes. El país mantenía su diversidad regional, junto con la desigualdad estructural que concentraba una parte desproporcionada de la población, la riqueza y los recursos en Buenos Aires y sus alrededores. Desde 1914 habían aparecido nuevos centros de crecimiento en las regiones, tales como el cinturón algodonero del Chaco, más allá de las pampas, pero en otros sentidos el interior permanecía en gran parte igual que antes. La Patagonia era una tierra vacía de inmensas granjas ovinas, el valle del Río Negro, una zona de cultivo de fruta en pequeña escala, Mendoza y San Juan, productores de vino, y Tucumán, fuente del azúcar. En el lejano nordeste y el lejano noroeste persistían las prácticas de trabajo forzado que los reformadores bonaerenses habían denunciado hacía ya mucho tiempo. El interior seguía siendo extremadamente pobre y en gran parte despoblado. En 1941 los ingresos combinados de nueve provincias del interior ascendían a sólo el 1 por ciento del total de ingresos imponibles en toda la nación, y los ingresos per capita de Catamarca y Santiago del Estero, dos de las provincias más pobres, representaban sólo un 10 por ciento de los de la ciudad de Buenos Aires. Las enfermedades causadas por la nutrición deficiente seguían siendo endémicas en el interior, sobre todo entre los obreros de la industria azucarera de Tucumán, que continuamente eran víctimas de la malaria, el impétigo e incluso la lepra. En Tucumán, como en gran parte del interior, el 50 por ciento de los nacimientos eran ilegítimos.

Pese al reciente desarrollo industrial, la inmensa clase media de Buenos Aires había experimentado pocos cambios durante la última generación y seguía estando muy agrupada en los servicios, las profesiones liberales, el comercio y la administración pública. En 1944 Felix Weil describió la clase media diciendo que era:

21. Raúl Scalabrini Ortiz, «De 'Política británica en el Río de la Plata'», en Ciria, ed., *La década infame*, p. 198.

Una masa bastante amorfa de elementos independientes formada por artesanos, mercaderes, propietarios de tiendas, oficinistas y agentes de empresas de exportación e importación, empleados de empresas de servicios públicos e innumerables beneficiarios del sistema de patronazgo político que viven de salarios y estipendios de todo tipo. Dado que no hubo industria en gran escala hasta que la industrialización aumentó después de 1930, no había ningún lugar para una clase media independiente. Lo que había eran los restos de una economía colonial unida al sistema que consistía en dar sinecuras como recompensa política. Esta masa es necesariamente amorfa en la política y en las filosofías políticas. Se convierte fácilmente en objeto de manipulación por parte de las maquinarias políticas.[22]

Durante todo el decenio de 1930 sucesivos gobiernos conservadores habían cortado deliberadamente el acceso de la clase media al poder y sus prebendas. Aunque las escuelas, academias y universidades administradas por la clase media mantenían la ciudad como centro de alta cultura, con frecuencia eran caldo de cultivo de aspiraciones sociales que luego se veían bloqueadas y de frustraciones cumulativas. Además de Weil, otros observadores hicieron comentarios sobre la congestión de las profesiones liberales y el descenso de las tasas de nupcialidad y natalidad y el aumento de la tasa de suicidios de la clase media en este período. En un artículo titulado «Esplendor y decadencia de la raza blanca», publicado en 1940, el economista Alejandro Ernesto Bunge instó a sus compatriotas, «en particular a los más bienaventurados materialmente», a practicar «matrimonios católicos» y criar familias numerosas. «A partir de ahora —declaró—, con todo nuestro vigor, nuestro patriotismo y con un abnegado espíritu cristiano, deberíamos procurar restaurar la aceptabilidad de las familias numerosas y la idea de que los hijos son una bendición».[23]

A primeros de 1940 muchos observadores empezaban a tomar nota de los cambios económicos y sociales habidos en años recientes. Pero esto se reflejaba poco en la política del gobierno. Durante los años treinta los líderes conservadores reconocían frecuentemente que las restricciones que habían impuesto a las importaciones y sus intentos de reencauzar el comercio exterior fomentarían el crecimiento industrial, pero seguían estando muy lejos de adoptar un compromiso deliberado con el desarrollo industrial. Por regla general, su perspectiva había cambiado poco desde el siglo XIX: arguían que un poco de desarrollo industrial reforzaría la balanza de pagos y contribuiría a evitar el malestar laboral al crear nuevos puestos de trabajo. El economista norteamericano George Wythe exageró al declarar en 1937 que, «El nuevo camino de [industrialización] ha sido aceptado y no es posible volverse atrás».[24] El Banco Central pintó un cuadro más fiel a la realidad en 1938: «La capacidad del país para la industrialización es limitada... y si incrementamos demasiado el poder adquisitivo, la producción no aumentará y subirán los precios... con todas las consecuencias desafortunadas en el coste de la vida».[25]

Lo que querían los miembros del gobierno y las entidades como el Banco Central no era intensificar el desarrollo industrial, sino tratar de restaurar las condiciones que exis-

22. Weil, *Argentine Riddle*, p. 4.

23. Alejandro E. Bunge, «Esplendor y decadencia de la raza blanca», *Revista de Economía Argentina*, nº 259 (enero de 1940), pp. 9-23.

24. Citado en Vernon L. Phelps, *The International Economic Position of Argentina*, Filadelfia, 1938, p. 7.

25. Citado en Eduardo F. Jorge, *Industria y concentración económica*, Buenos Aires, 1971, p. 172.

tían antes de 1930. Así pues, sus medidas favorecieron los intereses exportadores y procuraron reactivar las inversiones extranjeras. Los encargados de formular la política hicieron hincapié repetidas veces en los obstáculos para el desarrollo industrial: el riesgo de inflación, las escasas e inaccesibles reservas de carbón y mineral de hierro, las insuficiencias de la electricidad y el transporte, las escaseces de capital y la pequeñez del mercado nacional, que impedía las economías de escala. Fuera del reducido grupo de nacionalistas económicos, estos puntos de vista predominaban entre otros grupos políticos organizados, entre ellos una gran mayoría de los radicales.

A finales del decenio de 1930 la expansión industrial despertaba mayor interés entre los sindicatos al percibir éstos que la nueva industria significaba nuevos puestos de trabajo. Algunos, al igual que los nacionalistas, arguían que una política de progresiva redistribución de la renta debía acompañar al apoyo a la industria, ya que poner más dinero en manos de los asalariados contribuiría a ampliar los mercados e intensificaría el crecimiento industrial. Con todo, las ideas de esta clase recibían poco apoyo de los propios industriales, que continuaban pensando que los salarios bajos eran la clave de los beneficios elevados. Ejemplo típico de esta perspectiva era la Federación Argentina de Entidades del Comercio y la Industria, que hacía una guerra implacable contra los sindicatos porque «perturbaban» los mercados de trabajo. Algunos industriales, sin embargo, habían empezado a apoyar el proteccionismo. Poco a poco las ideas proteccionistas fueron ganando aceptación después de 1933, cuando la Unión Industrial Argentina, la mayor y la más poderosa de las asociaciones patronales urbanas, dirigió una campaña contra el «dumping» extranjero. Las campañas posteriores de la Unión atacaron las anomalías en los aranceles vigentes, que, según se alegó, con frecuencia imponían derechos más elevados a las materias primas industriales que a los productos acabados. Pero entre todos estos grupos, sindicatos y patronales por igual, no se había hecho ningún esfuerzo concertado o sostenido por promover el desarrollo industrial.

A comienzos de 1938 la presidencia de seis años de Agustín Pedro Justo llegó a su fin. En ese momento, en el epílogo de la prosperidad de antes de la guerra, no sólo crecían las influencias nacionalistas sino que habían aparecido claras diferencias en el seno de la Concordancia gobernante entre reformadores y reaccionarios. Las elecciones presidenciales de 1937, que la Concordancia volvió a ganar fácilmente gracias al fraude extenso, reflejaron esta división: la presidencia pasó a Roberto María Ortiz, que era reformador, pero la vicepresidencia fue para Ramón S. Castillo, líder de los conservadores.

Ortiz, que era hijo de un abacero vasco y hombre que se había hecho una posición por su propio esfuerzo, fue el primer presidente electo que procedía de la clase media urbana descendiente de inmigrantes. Ortiz se había ganado la vida y amasado una fortuna principalmente como abogado de varias compañías ferroviarias británicas y, por tanto, era impopularísimo entre los nacionalistas. Después de ser diputado radical durante el primer mandato de Yrigoyen (1916-1922), Ortiz ingresó en las filas de los antipersonalistas en 1924 y fue ministro de Obras Públicas bajo Alvear y luego ministro de Hacienda bajo Justo. Como sugería su carrera anterior, Ortiz era un demócrata antiyrigoyenista con unas impecables credenciales liberales-conservadoras: «liberal» por sus vínculos con los ingleses y su promesa de poner fin al fraude electoral («Creo sinceramente en los beneficios de la democracia» —dijo al aceptar la candidatura a la presidencia en julio de 1937), y «conservador» por su temor al «gobierno de la chusma» yrigoyenista. Castillo, en cambio, procedía de Catamarca, una de las provincias occidentales más subdesarrolladas, bastión de una oligarquía de hacendados. Durante muchos años había sido deca-

no de la facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires hasta convertirse en ministro de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Justo.

Al acceder Ortiz a la presidencia creció la tensión entre el gobierno nacional y Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fresco era un ex conservador que, al igual que el propio Ortiz, había tenido vínculos con los ferrocarriles británicos, pero ahora se presentaba como nacionalista. Lanzaba ataques continuos contra el «comunismo», perseguía a quienes consideraba partidarios del mismo y buscó la amistad y el patronazgo de Mussolini durante una visita a Roma en 1938. Pero también se presentaba como paladín de la reforma social. Bajo Fresco el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó obras públicas en gran escala entre las que había planes para edificar viviendas públicas y un amplio programa de construcción de carreteras. Patrocinó leyes laborales tanto para los trabajadores urbanos como para los rurales e hizo algunos intentos de crear una red de sindicatos controlados por su administración. En la capital federal le consideraban fascista.

El gobierno de Ortiz empezó a recortar los fondos y las subvenciones federales destinados a la provincia, lo cual obligó a Fresco a incurrir en déficits presupuestarios y más adelante a reducir sus actividades. Finalmente, en marzo de 1940 Ortiz decretó una intervención federal en la provincia de Buenos Aires para derribar a Fresco, al que acusó de tramar un fraude en las próximas elecciones para gobernador. Poco después Ortiz llevó a cabo intervenciones en otras provincias, entre ellas Catamarca, lo que disgustó mucho a su vicepresidente. En las elecciones para el Congreso de mayo de 1940 los radicales obtuvieron su mayor victoria desde hacía más de un decenio y volvieron a estar en mayoría en la Cámara de Diputados. Así pues, a comienzos de 1940 la política argentina parecía seguir el mismo rumbo que después de la elección de Roque Saenz Peña en 1910. Capitaneada por Ortiz, la Concordancia, al igual que los conservadores de treinta años antes, se había comprometido a restaurar la democracia. Y, como antes, la democratización abrió la puerta a los radicales.

Economía y política, 1940-1943

En el mismo momento en que tan fuerte parecía, la Argentina liberal se encontraba al borde del derrumbamiento. En mayo de 1940 Alemania invadió y ocupó la Europa occidental, y después de evacuar sus maltrechas fuerzas de las playas de Dunkerque, Gran Bretaña impuso un bloqueo naval contra el continente. Las conquistas alemanas y el bloqueo significaron un golpe para la economía argentina que fue aún más grave que el de 1929-1930. El comercio cayó en picado inmediatamente: en 1940 las exportaciones se redujeron en un 20 por ciento. En 1938 el 40 por ciento de las exportaciones de Argentina tuvieron por destino la Europa occidental, pero en 1941 la proporción había quedado reducida a sólo un 6 por ciento, casi toda dirigida a España y Portugal, que eran neutrales. Gran Bretaña importaba la mayor parte de la carne argentina y el mercado británico permaneció abierto, pero el continente europeo se había hecho inaccesible para la mayor parte de los cereales argentinos, y el resultado fue que los efectos más graves de la guerra fueron para la agricultura y los agricultores, en vez del ganado y los ganaderos. A finales de 1940 el tráfico en los puertos argentinos había quedado reducido a la mitad. Tanto las exportaciones como las importaciones se hundieron hasta niveles inferiores al punto bajo de la depresión.

Las condiciones perjudiciales que surgieron a finales de 1940 persistieron durante los siguientes cuatro años de guerra. En 1937 Argentina había exportado 17 millones de toneladas de cereales, pero en 1942 sólo pudo exportar 6,5 millones de toneladas. Los precios agrícolas alcanzaron una media de sólo dos tercios de los correspondientes a finales del decenio de 1930. Dentro de la agricultura en conjunto la guerra causó los mayores daños al maíz, ya que antes de la contienda alrededor del 90 por ciento del maíz iba a la Europa continental. Durante los últimos años treinta las exportaciones de maíz alcanzaron una media de más de 6 millones de toneladas, pero en 1941-1944 la cifra fue de sólo 400.000 toneladas. En 1941 las importaciones de carbón ya eran sólo un tercio de las de 1939, y en 1943, una sexta parte. En 1942 las importaciones de petróleo representaron la mitad del nivel de 1939 y en 1943, otra vez la mitad.

Inmediatamente antes de la guerra los importadores argentinos habían hecho pocos esfuerzos por formar una reserva de maquinaria, materias primas o piezas de recambio, por lo que ahora fue necesario improvisar con los materiales disponibles. Al verse privados del abastecimiento normal de carbón, los ferrocarriles recurrieron a quemar leños de quebracho, como hicieran en 1914-1918, y luego, al disminuir las reservas de leña, echaron mano del excedente de maíz. En 1944 los cereales satisfacían alrededor de un tercio de las necesidades energéticas del país. Al disminuir las reservas de petróleo importado, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hizo grandes esfuerzos por incrementar la producción y finalmente logró doblar la de los pozos de Comodoro Rivadavia. Aun así, la escasez de petróleo obligó a recurrir al uso generalizado de linaza como sucedáneo. La disminución de las importaciones ofreció grandes y nuevas oportunidades a los fabricantes argentinos y los turnos permanentes no tardaron en ser cosa común en las fábricas de Buenos Aires. Sin embargo, la tasa de crecimiento industrial durante la guerra fue un tanto menor que a finales del decenio de 1930, puesto que los industriales se vieron perjudicados ahora por las repetidas escaseces de electricidad y por la imposibilidad de obtener los suministros que necesitaban en el extranjero. Al mismo tiempo, el paro urbano siguió siendo prácticamente inexistente porque tanto la manufacturación como los servicios absorbieron sin parar a los nuevos trabajadores, entre los que había gran número de mujeres. Las reparaciones se convirtieron en el mayor componente del nuevo sector de servicios y un ejército de mecánicos versátiles se esforzaba por mantener en funcionamiento la maquinaria, los coches y los camiones viejos así como el material rodante que llevaba treinta años circulando.

El derrumbamiento de las exportaciones agrícolas a partir de mediados de 1940 tuvo algunos efectos beneficiosos en la economía urbana, toda vez que hizo que el pan fuese barato y el coste de la vida fuera relativamente estable. Pero la decadencia de la agricultura causó problemas en el campo. Durante la guerra tuvieron lugar dos procesos simultáneos: la agricultura decayó, pero la ganadería registró una expansión porque Gran Bretaña incrementó de manera ininterrumpida sus importaciones de carne. El resultado fue un gran cambio de la agricultura a la ganadería y la extensión de tierra cultivada disminuyó en más de 3 millones de hectáreas durante la contienda. Se calcula que la tierra destinada al cultivo de trigo disminuyó en un 8,4 por ciento, pero la destinada al maíz disminuyó en más de un 40 por ciento. Los excedentes de maíz ayudaron a intensificar el cambio a la ganadería, ya que hicieron crecer la cría de cerdos, actividad cuya importancia se multiplicó por dos durante la guerra. Hasta cierto punto el crecimiento del cultivo de forraje — alfalfa, cebada y avena — para la ganadería y algunos cultivos industriales nuevos encabezados por los girasoles compensó el descenso de los cereales básicos de

antes. Pero la tendencia primordial fue abandonar el cultivo de cereales por la ganadería. Entre 1937 y 1947 la cabaña de las pampas aumentó en un 25 por ciento, lo que equivalía a 3,5 millones de cabezas de ganado, mientras la población humana descendía en alrededor de medio millón. Los intentos gubernamentales de detener la salida de población, tales como el control de los arriendos que se introdujo en 1942, resultaron totalmente ineficaces y no consiguieron impedir que la gente abandonara el campo.

En cambio, las condiciones en el interior empezaron a divergir de las que existían en las pampas. Los productores del interior respondieron a la rápida expansión del mercado interno centrado en Buenos Aires incrementando la producción. El crecimiento fue especialmente acentuado en regiones como el Chaco, donde aún había tierra virgen disponible. En otras partes de las regiones campesinas colonizadas del noroeste y el nordeste el incremento de la producción para el mercado aumentó la demanda de mano de obra y, por tanto, contribuyó durante un tiempo a atraer habitantes a la región. Con todo, el crecimiento también aumentó la demanda de una reserva de tierra relativamente fija, y de esta manera, a largo plazo, provocó una expansión de las haciendas que producían para el mercado a expensas de las pequeñas propiedades campesinas orientadas a la subsistencia. El resultado final fue un proceso de cercamiento de los campesinos y el principio de una polarización latifundio-minifundio que con el tiempo se volvería aguda y a partir de los años cincuenta provocaría una segunda oleada de huídas del campo, mayor aun que la primera. De esta forma el interior acabaría substituyendo a las pampas como origen principal de inmigrantes internos.

A finales de 1940 el gobierno conservador procuró responder a la caída del comercio con un Plan de Reactivación Económica, más conocido con el nombre de Plan Pinedo, pues su autor principal era Federico Pinedo, que cumplía un segundo mandato como ministro de Hacienda. El plan se concibió basándose en la suposición de que durante el año siguiente, 1941, las exportaciones permanecerían en niveles inferiores a los de la depresión. Si así ocurría, el resultado sería «crisis industrial, paro y miseria en las ciudades, un derrumbamiento general de la actividad económica que tendría consecuencias sociales de alcance imprevisible».[26] Por tanto, Pinedo propuso, al estilo del New Deal, que se usara el gasto público como mecanismo anticíclico para reactivar la demanda, minimizar la inflación y salvaguardar el empleo. Sobre todo, la medida estaba relacionada con las «consecuencias sociales de alcance imprevisible», palabras que era fácil interpretar como referencia a la agitación laboral de la primera guerra mundial, que había culminado con la «huelga revolucionaria» de enero de 1919.

El Plan Pinedo representó la entrada de Argentina en el campo de la planificación económica global. En primer lugar, proponía que se ayudara al sector agrícola ampliando los planes de financiación que administraba la junta que el propio Pinedo había creado siete años antes. El gobierno aumentaría sus compras de cereales a los agricultores y ofrecería precios más altos, al tiempo que instaría a los terratenientes a ser comedidos con los arriendos para que a los arrendatarios les quedasen unos beneficios suficientes. En segundo lugar, el plan procuraba fomentar un crecimiento industrial más rápido y empezar a exportar productos industriales. Proponía que se creara un nuevo fondo crediticio respaldado por el estado para la industria y que se introdujeran reintegros, plan que la Unión Industrial pedía desde hacía mucho tiempo y que disponía que se reembol

26. Véase «El plan de reactivación económica ante el Honorable Senado», *Desarrollo Económico*, 19, nº 75 (1979), p. 404.

saran a los exportadores de manufacturas los derechos arancelarios en que incurrieran al importar materias primas o bienes de capital. Como complemento de estas medidas, el gobierno intentaría firmar tratados de libre comercio con otras naciones de América Latina con el fin de crear mercados nuevos para las manufacturas y ayudar a los productores a beneficiarse de las economías de escala. En tercer lugar, el plan proponía que se financiara la expansión de la industria de la construcción, que el gobierno creía capaz de proporcionar más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Por medio de programas de construcción subvencionados por el gobierno, se ofrecerían casas baratas con hipotecas a largo plazo a los obreros y los empleados.

En 1940 el gobierno todavía era sumamente sensible a la acusación de que se inclinaba hacia la financiación mediante déficit con el consiguiente riesgo de inflación. Pinedo declaró que el plan no se financiaría imprimiendo dinero, sino recurriendo a empréstitos internacionales y que los desembolsos se dirigirían hacia las actividades productivas en vez de emplearlos como meras subvenciones para los parados. El Plan Pinedo manifestaba una preocupación mucho mayor por la agricultura que por la industria, ya que el total de las sumas asignadas para conceder créditos a la industria representaba sólo una sexta parte de las destinadas a los agricultores. Así pues, el cambio a favor de la industria siguió siendo relativamente pequeño. Pinedo declaró que el gobierno apoyaría únicamente a las «industrias naturales». Esta expresión era de uso común entre los liberales desde hacía setenta años y significaba que sólo recibirían apoyo del gobierno las industrias que empleasen una cantidad considerable de materias primas del país y que fueran competitivas. Pinedo contaba con que la industria continuase teniendo un papel secundario en la economía. Al defender la medida ante el Congreso, dijo que las exportaciones agrícolas eran la «rueda principal» de la economía; la manufacturación y la construcción se convertirían en «ruedas menores» al lado de las exportaciones.

El Plan Pinedo ofreció una fórmula para un cambio controlado y cierto grado de diversificación que serviría para contener los efectos de la guerra y minimizaría la agitación y la dislocación. Pero no pasó de ser un plan, toda vez que apareció cuando el país ya había caído en una crisis política. En julio de 1940 el presidente Ortiz, que era diabético y ahora sufría ataques de ceguera, tuvo que abandonar el cargo y traspasar el poder al archiconservador Castillo. Durante un año, hasta que Ortiz finalmente dimitió, Castillo fue sólo presidente en funciones. Pero poco después de asumir la presidencia empezó a dar marcha atrás a la política de liberalización emprendida meses antes. En septiembre de 1940 Castillo ya había reorganizado parcialmente el gabinete y, con creciente enfado de los radicales, empezó a organizar elecciones en las provincias que Ortiz había puesto bajo «intervención». En estas elecciones hubo mucho fraude y los conservadores ganaron en la mayoría de ellas. Hacía muy poco que los radicales habían estado convencidos de que por fin iban camino de recuperar el poder y ahora se encontraron en peligro de ser estafados por Castillo. Empezó entonces una racha de conflictos enconados entre los partidos cuya víctima principal fue el Plan Pinedo. Aunque el Senado, que los conservadores dominaban, aceptó el plan, la mayoría radical en la cámara baja impidió que se debatiera. Los radicales rechazaron un llamamiento de Pinedo a favor de un «acuerdo histórico» para hacer frente a la crisis económica hasta que se les ofreciera una satisfacción por las recientes elecciones.

El Plan Pinedo fracasó debido a las largas peleas entre los radicales y los conservadores que Castillo había vuelto a provocar. Sin embargo, aun en el caso de que la política no hubiese predominado, el plan contenía ciertos supuestos y expectativas que desde

el principio hicieron dudar de su éxito. Durante los meses siguientes una serie de decretos ejecutivos puso en práctica muchas de sus propuestas relativas a la agricultura, pero poco hizo por resolver la crisis agrícola o detener la creciente oleada de emigrantes que llegaban a Buenos Aires.

El Plan Pinedo también planteó un asunto que ahora era de la mayor importancia: las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de promover la industria se apoyaba en la suposición de que Argentina podría continuar importando los bienes de capital y las materias primas de los que carecía. Sin embargo, para importar tenía que exportar o, en su defecto, asegurarse de una afluencia importante y continua de empréstitos e inversiones extranjeros. En ese momento, con el cierre de los mercados europeos para sus cereales, el mercado británico era el único importante que le quedaba. Pero al movilizarse para la guerra, Gran Bretaña no pudo seguir exportando a Argentina las mercancías que eran útiles para la industria local. El resultado fue que durante toda la contienda las ganancias de exportación de Argentina se acumularon en Gran Bretaña como «saldos en libras esterlinas». A finales de 1942 dichos saldos ya ascendían a 295 millones de pesos, y un año después, a 714 millones. Se calcula que en diciembre de 1944 los saldos superaban los mil millones de pesos, es decir, unos 80 millones de libras esterlinas. Los ingleses se comprometieron a proteger los saldos en libras esterlinas de cualquier devaluación futura de la libra, pero con la esperanza de cancelar la deuda por medio de exportaciones después de la guerra, mantuvieron los saldos «bloqueados» en Gran Bretaña, completamente fuera del alcance de los argentinos. En varias ocasiones los ingleses respondieron negativamente cuando Argentina pidió que los fondos bloqueados se usaran para liquidar parte de su deuda con Gran Bretaña o se canjearan por los activos de empresas de propiedad británica en Argentina; estas empresas, encabezadas por las ferroviarias, solían comprar la mayor parte de sus suministros en Gran Bretaña y, por tanto, ayudaban a las exportaciones británicas. Además, los ingleses jamás permitirían que los argentinos convirtieran en dólares sus saldos en libras esterlinas, toda vez que eso significaría volver a las prácticas comerciales del decenio de 1920, cuando las ganancias que obtenía Argentina de sus ventas a Gran Bretaña se usaban para incrementar las compras en Estados Unidos. Los ingleses consideraban que dichas prácticas eran sumamente desfavorables. En 1940 Argentina se encontró atrapada en la relación bilateral con Gran Bretaña que tan ansiosamente había buscado en 1933, pero de una manera que no tenía ninguna utilidad para el objetivo de «reactivación económica» de Pinedo.

Al preparar el plan de 1940, tanto Pinedo como Raúl Prebisch, que seguía siendo su principal consejero, previeron que Estados Unidos se convertiría en proveedor substitutivo de las mercancías que necesitaba la industria local y en nuevo mercado para las exportaciones argentinas. «El gran mercado de Estados Unidos —declaraba el plan— ofrece enormes oportunidades. No hay ninguna razón lógica por la cual nuestros productores no deban sacar provecho de él».[27] Durante un breve periodo a finales de 1940 Pinedo intentó orquestar una campaña pro Estados Unidos en Argentina y fomentar la idea de que estrechar los vínculos con el citado país daría por resultado una oleada de prosperidad. Los cálculos de Pinedo trascendían los objetivos puramente a corto plazo. A ojos de conservadores como él, Argentina se encontraba ahora en una encrucijada histórica. El antiguo vínculo con Gran Bretaña ya no funcionaba y, de hecho, podía derrumbarse completamente si, como ahora parecía muy probable, Gran Bretaña era inva

27. «El plan de reactivación económica», p. 423

dida y derrotada por los alemanes. Una nueva relación con Estados Unidos no sólo resolvería el asunto del comercio, sino que, además, también salvaguardaría con ello el dominio político de la clase que formaban los rancheros y los comerciantes y que sostenía el conservadurismo liberal. Por estas razones Pinedo abogó ahora por una «cooperación estrecha y total» con Estados Unidos.

Sin embargo, en este momento Argentina tampoco logró salvar las barreras que durante casi un siglo habían obstaculizado de manera persistente todos los esfuerzos por crear lazos estables y duraderos con Estados Unidos. Durante el decenio anterior las relaciones entre los dos países con frecuencia habían sido frías al extender Estados Unidos sus medidas proteccionistas contra las mercancías procedentes de Argentina. En 1930 la Ley Hawley-Smoot reforzó las restricciones que afectaban a la mayor parte de la carne y los cereales argentinos al subir los aranceles sobre la carne y el trigo e imponer nuevos derechos a las pieles. En 1935 todos los artículos agrícolas importados que se vendían más baratos que sus equivalentes norteamericanos fueron prohibidos por completo. En 1936 se impusieron nuevos derechos al sebo argentino. Durante todo el decenio de 1930 Estados Unidos se valió de las normas sanitarias, aparentemente dirigidas contra la propagación de la glosopeda, para excluir otras mercancías procedentes de Argentina. Tanto Uriburu como Justo formularon protestas intermitentes pero inútiles contra estas medidas, mientras Estados Unidos rechazaba la sugerencia que hizo Justo para la firma de un tratado bilateral entre los dos países. A modo de represalia, los conservadores, al igual que los radicales a finales de los años veinte, a veces hostigaban a compañías norteamericanas como la Standard Oil al tiempo que empleaban los controles de cambios para excluir las importaciones estadounidenses. Así pues, durante todo el decenio de 1930 las importaciones procedentes de Estados Unidos fueron una mera fracción de lo que habían sido en los años veinte, a la vez que las exportaciones argentinas a Estados Unidos quedaban reducidas a la mitad.

Los conflictos comerciales de los años treinta agudizaron las corrientes contra Estados Unidos que existían en estado latente en Argentina. Los argentinos empezaron a pasar por alto o atacaban la política «de buena vecindad» del gobierno Roosevelt, que renunciaba a la intervención armada de Estados Unidos en América Latina, y veían el movimiento panamericano patrocinado por Washington como un ejemplo de «maquiavelismo yanqui» cuyo verdadero propósito era controlar todo el continente sudamericano. Después de 1935 Argentina participó, a veces de mala gana, en las sucesivas conferencias panamericanas patrocinadas por Estados Unidos, y cuando, próximo ya el estallido de la guerra, los norteamericanos intentaron crear una alianza defensiva panamericana, el gobierno Ortiz aprobó la idea con poco entusiasmo. El comercio y la diplomacia habían quedado vinculados de forma inextricable. A finales de 1939 como mínimo algunos norteamericanos empezaban a reconocer la causa principal de la poca disposición a cooperar que mostraba Argentina. «Ganarse la amistad de Argentina —declaró John W. White, diplomático norteamericano en Buenos Aires— es en gran parte cuestión de comercio y economía.» «Debemos resignarnos —prosiguió— a hacer algunos sacrificios comerciales en aras de nuestra seguridad política y militar, y permitir la importación de productos argentinos.»[28] Pero en 1939-1940 lo único que obtuvo Argentina de Estados Unidos fue un crédito del Export Import Bank de Nueva York para la compra de mercancías norteamericanas. Después de la Ley de Préstamos y Arriendos de

28. John W. White, *The Life Story of a Nation*, Nueva York, 1942, pp. 21, 311.

enero de 1941, Washington empezó a proporcionar armas a sus aliados latinoamericanos encabezados por Brasil, pero dio a Argentina la prioridad más baja negándole casi totalmente los pertrechos militares debido a su postura ante la defensa del hemisferio

Sobre este trasfondo desalentador, pero como parte de la estrategia del Plan Pinedo, el gobierno Castillo emprendió finalmente negociaciones comerciales oficiales con Estados Unidos y buscó por medio de un tratado comercial —el primero con Estados Unidos desde hacía casi un siglo— las concesiones que se le habían negado durante tanto tiempo. Durante cierto tiempo los miembros del gobierno, los partidos políticos y hasta algunos sindicatos se convirtieron en partidarios entusiasmados del panamericanismo al pensar en la llegada de abundantes fondos y mercancías estadounidenses. Pero cuando se firmó el tratado en octubre de 1941, la decepción fue total, ya que ambas partes hicieron sólo concesiones simbólicas. Estados Unidos ofreció poco más que rebajar los aranceles que gravaban las mercancías que ya importaba de Argentina, tales como linaza y pieles Las únicas mercancías nuevas que se importarían de Argentina eran algunos minerales raros, como el tungsteno, que necesitaban los fabricantes de armas estadounidenses, y algunos productos lácteos y vinos que Estados Unidos importaba antes de Francia e Italia Pero la puerta siguió cerrada a los grandes productos básicos de Argentina, la carne y los cereales. Estados Unidos dio así la impresión de que el tratado era simplemente un recurso que la guerra hacía necesario y que no reflejaba ningún cambio importante en su política tradicional.

El fracaso del tratado de octubre de 1941 con Estados Unidos señaló el próximo fin del plan liberal conservador para lograr la recuperación económica y mantener así el dominio político. Durante más de un año, desde que Ortiz se vio obligado a retirarse en julio de 1940 el equilibrio de poder en la Concordancia y el gobierno había ido cambiando A principios de 1941 Pinedo había dimitido a raíz de las acusaciones instigadas por los nacionalistas sobre su involucración en tratos corruptos con las compañías ferroviarias británicas. En marzo el ministro de Relaciones Exteriores, José Luis Cantilo, liberal conservador, también había dimitido, con lo que los ultraconservadores acaudillados por Castillo en persona habían pasado a dominar el gobierno Pero Castillo se veía cada vez más aislado y repondió introduciendo en el gobierno a hombres que simpatizaban con los nacionalistas Entre ellos se encontraba el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, cuyas simpatías por la España del general Franco eran muy conocidas.

Así pues, el nacionalismo iba dejando de ser un movimiento situado al margen de la política. A medida que surgían nuevas organizaciones nacionalistas y su propaganda se intensificaba, los nacionalistas empezaron a arrastrar al país en varias direcciones nuevas. La primera era hacia la «soberanía económica», lo cual significa principalmente aumentar la industrialización y nacionalizar las compañías extranjeras en el sector de los servicios públicos. La segunda era lo que dio en llamarse «neutralidad activa», que quería decir, como la definió sucintamente un propagandista en enero de 1941, «no somos neutrales, estamos en contra de todos».[29] La tercera consistió en dar nuevo énfasis a la «justicia social». A finales de 1939 los nacionalistas se quejaban de que

en Santiago del Estero la gente carece de agua [En otras partes] no hay pan. En el sur los niños no van a la escuela por falta de ropa Pero en Buenos Aires un comité formado por

29. *El Fortín*, enero de 1941.

dos ex presidentes, un vicepresidente, senadores, etcétera — todos ellos argentinos recauda fondos para los hospitales de guerra en Francia.[30]

En 1941 estos sentimientos habían adquirido una forma más agresiva. La Alianza Libertadora Nacionalista declaró que ahora los nacionalistas aspiraban al «liderazgo de las masas proletarias, para ponerlas en armonía con otros elementos de la sociedad hacia la conquista de la justicia y la grandeza de la Nación».[31] Un típico programa nacionalista de 1941 indicaba las siguientes exigencias: «emancipación económica» para que el país pudiera recuperar «todas sus fuentes de riqueza» controladas por extranjeros; creación de «grandes mercados de consumo interno» por medio de la «industrialización», redistribución de la «tierra no cultivada "para su trabajo"», «representación funcional», «salarios justos»; reintroducción de la educación católica en las escuelas; defensa contra las «amenazas a la unidad nacional» (eufemismo del antisemitismo y el anticomunismo); y medidas para garantizar la «preparación militar» del país.[32] Estas ideas se expresaban comúnmente en las consignas «Soberanía», «Nacionalización», «Justicia Social».

Muchos observadores consideraban que todo esto eran síntomas de la ascensión del nazi-fascismo en Argentina. Años después Raúl Prebisch instó a sus oyentes a no subestimar la influencia nazi en Argentina durante el decenio de 1930. «La he visto; la he experimentado en persona cuando estaba en el Banco Central. La penetración del nazismo en el ejército, en ciertos periódicos, ayudada por los recursos de la embajada alemana era un elemento muy preocupante en Argentina».[33] En efecto, del mismo modo que los fascistas acechaban entre los nacionalistas en los años treinta, quienes acechaban ahora eran los simpatizantes nazis, entre ellos la redacción de *El Pampero*, un periódico nuevo de Buenos Aires cuyo director, Enrique Osés, recibía subvenciones de la embajada alemana a cambio de publicar boletines de guerra nazis y un poco de propaganda del mismo signo. En 1940-1941 algunos esperaban que Alemania proporcionase el tipo de relación que el grupo de Pinedo había querido establecer con Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos nacionalistas miraban a Alemania y al nazismo con hostilidad. Para los grupos hispanófilos católicos el nazismo simbolizaba «cuatrocientos años de apostasía» que había empezado con la Reforma, y los pro nazis locales recordaban a un nacionalista (refiriéndose a Carlos de Alvear, uno de los líderes del movimiento independentista argentino) «la postura de algunos de los hombres durante la revolución de mayo [de 1810], que contribuyeron a nuestra independencia de España sólo para hacernos depender de los ingleses».[34] En septiembre de 1939 un diplomático nazi en Buenos Aires comentó a sus superiores en Berlín: «El sentimiento antibritánico ... no debe interpretarse como pro alemán ... La nueva Alemania se ve como anticultural [*sic*] ... debido a su supuesta amenaza a la Iglesia católica».[35] Más que expresar una expansión de la influencia nazi-alemana, el nacionalismo surgió tras el creciente sentimiento antinorteamericano y en el vacío que dejaron los liberales-conservadores al abandonar la Concordancia. A finales de 1941, tras

30. *La Maroma*, octubre de 1939.
31. Citado en Comisión de Estudios, *El nacionalismo*, p. 50.
32. Estatutos del Consejo Superior del Nacionalismo, Buenos Aires, 1941.
33. Raúl Prebisch, «Argentine Economic Policies since the 1930s — Recollections», en Guido Di Tella y D. C. M. Platt, eds., *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Londres, 1986, p. 146.
34. Ibarguren hijo, *Laferrère*, p. 94.
35. Citado en Stewart Edward Sutin, «The Impact of Nazism on Germans in Argentina», tesis doctoral, Universidad de Texas, 1975, p. 68.

el fracaso de la aproximación a Estados Unidos, Argentina se encontró privada de mercados y pertrechos extranjeros. Además, se hallaba ante lo que percibía como una amenaza militar por parte de Brasil, país al que los norteamericanos estaban armando más rápidamente que a cualquier otro de la región. Impulsada por los nacionalistas, la respuesta de Argentina se volvió cada vez más enérgica y recalcitrante. Mientras reafirmaba su neutralidad y se negaba a doblegarse ante la presión estadounidense para que entrase en la alianza panamericana, empezó a buscar maneras de superar su aislamiento económico y militar.

A finales de 1941 las influencias nacionalistas adquirieron más fuerza y arraigo en el seno del ejército, donde la idea de crear una industria armamentista nacional ejercía una fascinación creciente, lo que a su vez aumentó mucho el apoyo al desarrollo industrial. Los anteriores planes de promoción industrial, como el de Pinedo, hacían hincapié en la industrialización *selectiva*, es decir, la creación de empresas cuyo objetivo fuera la eficiencia competitiva y que buscasen economías de escala por medio de la exportación. Lo que iba adquiriendo forma ahora era el compromiso con la industrialización *total*, dirigida por el ejército y el estado. Presionado por el ejército, el gobierno creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se encargaría de proyectar armamentos. Al cabo de un año y pico el coronel Manuel S. Savio trazó los planes para la creación de una industria del acero y propuso que el estado se encargara de financiarla y dirigirla.

Durante 1941 y 1942 Castillo se aferró al poder pese a que su base de apoyo era cada vez más estrecha y al crecimiento ininterrumpido de la oposición encabezada por los radicales. Si bien algunos nacionalistas como Ruiz Guiñazú habían entrado en el gobierno, la mayoría de ellos rechazaban el régimen por considerarlo demasiado «liberal», «oligárquico» o «electoralista». Con el Congreso controlado por los radicales, el presidente empezó a gobernar casi exclusivamente por decreto. El ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue el pretexto primero para la imposición del estado de sitio y luego para usar la policía para impedir las manifestaciones (generalmente a favor de los aliados) y amordazar a la prensa. Pero Castillo no logró contener a la oposición y se vio obligado a cultivar al ejército. Con intervalos regulares ofrecía espléndidos banquetes a los que asistían jefes militares. La crisis y un ambiente de decadencia invadían ahora el país. John W. White, el observador norteamericano, percibió los «problemas de 1942» como

> el gobierno reaccionario de la fuerza en manos de un partido minoritario, una economía cerealista excesivamente especializada con una dependencia casi impotente de los mercados extranjeros, una concentración poco saludable de la población en las ciudades, una clase agricultora explotada que no estaba instalada en la tierra que trabajaba, una tasa de natalidad en descenso y una elevada tasa de ilegitimidad y analfabetismo.[36]

Las dificultades de Castillo se agravaron cuando las relaciones con Estados Unidos empeoraron de manera acusada al encabezar Ruiz Guiñazú un intento de fomentar el neutralismo, a expensas del panamericanismo, en otras partes de América Latina. En enero de 1942, en la conferencia panamericana de Río de Janeiro, cuyo propósito principal era persuadir a las naciones latinoamericanas a romper las relaciones diplomáticas

36. White, *Argentina*, p. 292.

con el Eje y Japón, Ruiz Guiñazu se opuso constantemente a Estados Unidos y, aunque no logró crear un «bloque meridional» fuera de la alianza panamericana, sí consiguió impedir que se accediera a romper las relaciones. La resolución que salió de Río meramente «recomendaba» la ruptura, pero dejaba que cada país determinara su propia forma de proceder. Bajo la dirección del Secretario de Estado, Cordell Hull, Washington tomó represalias e impuso a Argentina un embargo total de armas, detuvo la concesión de créditos del Export-Import Bank y canceló el suministro de petroleros y maquinaria.

Después de la conferencia de Río, Estados Unidos empezó a calificar el gobierno argentino de «fascista» y «pro Eje». En Buenos Aires corrían rumores de una inminente invasión por parte de Brasil y de planes de ocupación de Comodoro Rivadavia, la principal fuente de petróleo, por la infantería de marina norteamericana. Pero mientras esta presión iba en aumento durante todo 1942, Castillo encontró apoyo inesperado por parte de Gran Bretaña. En los primeros años cuarenta Estados Unidos y Gran Bretaña tenían objetivos muy diferentes con respecto a Argentina. Lo que más interesaba a los norteamericanos era forjar un frente militar y político unido en toda América Latina y veía Argentina como un obstáculo para ello. Gran Bretaña, sin embargo, dependía cada vez más de la carne argentina y opuso resistencia a toda forma de proceder que amenazara los envíos de carne. Además, debido a los extensos intereses comerciales y financieros de Gran Bretaña en Argentina, los ingleses eran reacios a permitir que Argentina entrase totalmente en la órbita de Estados Unidos, como parecía probable que sucediera si Argentina se comprometía plenamente con el panamericanismo. Desde 1940 Gran Bretaña había visto con aprensión los intentos estadounidenses de hacerse con el control de las compañías británicas que actuaban en Argentina. Una propuesta norteamericana de dicho año, por ejemplo, sugería que los ingleses pagaran la carne argentina con acciones de las compañías británicas, que luego Argentina utilizaría para pagar las importaciones de Estados Unidos. Debido a ello, en Gran Bretaña la opinión era a menudo favorable a una Argentina neutral. Aunque la neutralidad argentina representaba el riesgo de permitir que espías del Eje transmitieran información sobre los movimientos de los barcos británicos, ayudaría a proteger los barcos que transportaban carne bajo bandera argentina de los ataques de los submarinos alemanes.

A partir de comienzos de 1942 el Departamento de Estado norteamericano buscó pruebas que corroborasen su creencia de que debajo de la neutralidad de Argentina se ocultaba el apoyo al Eje. Sacó a la luz las subvenciones que *El Pampero* recibía de la embajada alemana; acusó al gobierno argentino de favorecer la propaganda alemana contra los aliados y de tratar de acabar con las organizaciones pro aliados, descubrió que el gobierno de Buenos Aires tenía tratos con empresas alemanas y que se habían concedido visados a personas que eran sospechosas de ser espías alemanes. Pero el ministerio de Asuntos Exteriores británico adoptaba a menudo una postura diferente. A veces reconocía las dificultades prácticas de administrar la neutralidad en un país en el cual la mayoría de las potencias beligerantes poseían considerables intereses comerciales y nutridas colonias de expatriados. Los ingleses parecían reconocer la falta de un compromiso general con la causa aliada en Argentina. En general, la opinión pública estaba a favor de la democracia y temía el totalitarismo, pero estas simpatías se veían empañadas por las animosidades que seguía despertando Gran Bretaña a causa del Tratado Roca-Runciman y por la hostilidad profundamente arraigada contra Estados Unidos. Durante todo 1942 y comienzos de 1943 la opinión británica, aunque se basara en el interés propio, ofrecía una visión más exacta de los asuntos argentinos que la de Estados Unidos: en vez de apo-

yar secretamente al Eje, en realidad Castillo no apoyaba a nadie. No tenía ninguna política exterior constructiva y su única intención era aguantar hasta que terminase la guerra, con la esperanza, al parecer, de que en tal momento Argentina pudiera restaurar su relación de antes de la contienda con la Europa occidental y de que disminuyera la presión estadounidense.

A mediados de 1943 Castillo tuvo que hacer frente a otra crisis política nacional, y esta vez no logró superarla. En abril se negó a apoyar a Rodolfo Moreno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pretendía sucederle y causó con ello una escisión en la Concordancia. Al cabo de un mes y poco se supo que Castillo quería que Robustiano Patrón Costas, destacado magnate del azúcar de Tucumán y conservador de la vieja guardia procedente del lejano interior como él mismo, fuese el próximo presidente. En cuestión de días la noticia de las intenciones de Castillo provocó un golpe de estado militar que, el 4 de junio de 1943, apartó al régimen con la misma facilidad con que el ejército había despachado a los liberales en 1930. Una vez más las tropas marcharon hasta el centro de Buenos Aires para ocupar la Casa Rosada, mientras durante unas horas Castillo hacía inútiles intentos de resistencia desde un destructor de la armada en el Río de la Plata en el cual se había refugiado.

La subida de Perón, 1943-1946

El golpe de junio de 1943 se diferenció del de septiembre de 1930 en que llegó sin anunciarse, sin la visible agitación civil que había presagiado la caída de Yrigoyen; pareció pillar por sorpresa a la población en general. Sin embargo, el golpe había estado en el aire desde hacía meses. En el momento de la caída de Castillo la Concordancia no era más que una sombra de lo que había sido, y durante algún tiempo el gobierno había sobrevivido gracias sólo al ejército. En dos aspectos el golpe de 1943 se pareció al de 1930: fue concebido y ejecutado exclusivamente por el ejército y sus líderes se dividían en «liberales» y «nacionalistas». Los primeros, que al principio eran más importantes en número y categoría, pretendían crear de nuevo un gobierno como el de Ortiz libre del fraude que creían que acompañaría a la elección de Patrón Costas y respaldados por los grandes grupos de intereses liberales o «fuerzas vivas». De los liberales podía esperarse que llegaran rápidamente a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual ahora significaba, ante todo, romper las relaciones con el Eje. Los nacionalistas, en cambio, seguían comprometidos con oponer resistencia a Estados Unidos, con mantener la neutralidad y apoyar la creación de una industria nacional de armamentos.

En el corazón de la facción nacionalista había una asociación secreta de militares, el Grupo Obra de Unificación (GOU), que consistía sólo en una veintena de miembros activos, cerca de la mitad de ellos coroneles u oficiales de graduación inferior. El GOU estaba obsesionado con el comunismo. Antes de la revolución de junio sus miembros parecían menos preocupados por la perspectiva de que otro gobierno conservador fuera elegido mediante el fraude que por la posibilidad de que apareciera un frente popular controlado por los comunistas que concurriese a las elecciones de noviembre. La victoria electoral de un frente popular, según los miembros del GOU, acarrearía un desastre tan grande como la revolución rusa o la guerra civil española. El GOU consideraba que su obligación era hacer que el ejército en general se diera cuenta de este peligro: de ahí su «tarea de unificación». Los miembros del GOU parecían ser nacionalistas de unifor-

me y no paraban de hablar de «conspiraciones internacionales». El movimiento masónico internacional, por ejemplo, era «creación de los judíos ... una temible organización secreta, de carácter internacional ... una especie de mafia corregida y aumentada ... Entre sus obras se contaban la revolución francesa, la guerra civil española ... Es anticatólica y, por tanto, por definición antiargentina». El Club de Rotarios era una «red de espionaje y propaganda del judaísmo internacional al servicio de Estados Unidos». Y el Frente Popular era «una seudodemocracia, una vulgar reunión de compañeros de viaje (comunizantes) que actuaban a instancias del judaísmo ... una organización declaradamente revolucionaria que trataba de repetir la pauta de España, donde los moderados cayeron y se convirtieron en marionetas de los comunistas». Los nacionalistas, en cambio, eran «las fuerzas más puras, las que tenían la mayor conciencia espiritual dentro del panorama de la política argentina».[37] Los vínculos estrechos entre el GOU y los nacionalistas quedan demostrados por una notable afirmación que pretendía justificar la revolución de 1943 y la imposición de la dictadura militar y que cobró la forma de una larga cita de la obra de san Agustín *De libero arbitrarie*:

> Cuando un pueblo es moderado y serio por costumbre ... y estima el interés de todos por encima del interés particular, es justa la ley que le permite elegir sus propios magistrados. Pero cuando poco a poco empieza a poner el interés particular por encima del bien común, y si es corrompido por hombres ambiciosos, cae en la costumbre de vender sus votos y entregar el gobierno a los depravados, es justo que el hombre de buena voluntad, aunque sea un solo hombre poseedor de influencia o de la fuerza necesaria, pueda quitar el derecho de escoger gobierno y pueda someter el pueblo a la autoridad de un solo hombre.[38]

El líder titular del golpe de estado de junio era el general Arturo Rawson, popular y bien relacionado tanto en el ejército como en la marina y capaz de unir a las dos fuerzas contra Castillo en una promesa de extirpar la corrupción gubernamental. Pero después de asumir la presidencia, Rawson fue depuesto inmediatamente por sus colegas militares tras una serie de disputas relacionadas con la composición del nuevo gabinete. El lugar de Rawson lo ocupó el general Pedro Ramírez, que hasta pocos días antes del golpe había sido ministro de la Guerra en el gobierno de Castillo. La fuerza de la pretensión de Ramírez estaba en sus vínculos secretos con el GOU, cuyos miembros, de hecho, le habían jurado lealtad, pero también en su atractivo para los liberales y los radicales; durante los meses anteriores se había insinuado que los radicales querían que Ramírez fuese su candidato en las elecciones de noviembre.

El gabinete de Ramírez lo formaban casi exclusivamente miembros de las fuerzas armadas cuyas filiaciones políticas exactas aún no eran claras pero que, de hecho, se dividían en partes casi iguales en liberales y nacionalistas. El único miembro civil del gabinete era Jorge Santamarina, el ministro de Hacienda, liberal muy conocido como vástago de las fuerzas vivas o, como lo calificó el GOU, «uno de ellos».[39] Al menos por fuera el nuevo gobierno parecía controlado por los liberales; el Departamendo de Estado norteamericano

37. Citas de Robert A. Potash, comp., *Perón y el G. O. U. Los documentos de una logia secreta*, Buenos Aires, 1984, pp. 101-102, 103, 199, 200.

38. Citado en *ibid.*, p. 235.

39. *Ibid.*, p. 220.

se apresuró a dar la bienvenida al golpe y a reconocer a Ramírez, mientras la embajada alemana quemaba sus archivos secretos al día siguiente del golpe. Ciertamente en ese momento los liberales controlaban la política exterior por mediación del almirante Segundo Storni, ministro de Relaciones Exteriores. A comienzos de julio Ramírez informó a Estados Unidos de que podía esperar que Argentina rompiera sus relaciones diplomáticas con Alemania en agosto. En ese momento, además, Ramírez, a pesar de sus vínculos con el GOU, parecía dispuesto a convocar elecciones al cabo de poco tiempo porque, al parecer, preveía que iba ser el candidato de una coalición encabezada por los radicales.

Antes de que transcurriera un mes desde el golpe, las dos facciones se hallaban enzarzadas en una lucha por el control total del régimen militar. Los liberales querían sacar a los nacionalistas del gobierno y el lema de su campaña era «Poned los generales delante de los coroneles» y los nacionalistas contraatacaban con una campaña cuyo objetivo era impedir que Ramírez fijase una fecha para las elecciones, las cuales, según arguían, significarían la entrada del Frente Popular y, por ende, los comunistas en el poder. Hubo numerosas disputas entre los dos bandos a causa de los nombramientos gubernamentales de nivel inferior, toda vez que los dos trataban de meter a sus propios hombres en el gobierno. Finalmente, a comienzos de septiembre los liberales intentaron salir del punto muerto recabando el apoyo de Estados Unidos. En la célebre «carta de Storni» a Cordell Hull, el ministro de Relaciones Exteriores daba a entender que el régimen ya estaba preparado para romper las relaciones con el Eje, pero pedía a Hull que primero levantara el embargo de armamentos. Storni arguía que levantar el embargo representaría un gesto de buena voluntad por parte de Estados Unidos, que demostraría su disposición a restaurar el equilibrio estratégico en América del Sur, eliminando lo que Argentina percibía como la amenaza militar de Brasil. El propósito obvio de esta petición era provocar en el ejército una oleada de sentimientos a favor de Estados Unidos que los liberales pudieran aprovechar luego para vencer a los nacionalistas y acabar con ellos. Pero Hull hizo caso omiso de esta importantísima oportunidad de intervenir de una manera que favoreciese los intereses de Estados Unidos. En contra de los deseos de sus principales consejeros encabezados por Sumner Welles, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, rechazó de forma tajante la petición de Storni y exigió que Argentina rompiera las relaciones con el Eje sin ningún quid pro quo previo por parte de Estados Unidos. En su respuesta Hull sacaba a colación el comportamiento de Argentina durante la conferencia de Río de Janeiro dieciocho meses antes, cuando había desafiado sistemáticamente las propuestas norteamericanas. Así pues, la carta de Storni no ayudó a los liberales, sino que más bien dio la razón a los nacionalistas y reforzó el argumento que venían presentando de manera persistente desde 1941: Estados Unidos era hostil a Argentina y, por tanto, el único recurso de Argentina era obrar por cuenta propia. Pocos días después de que la respuesta de Hull llegase a Buenos Aires, todos los liberales, incluido Storni, habían dimitido del gobierno de Ramírez y habían sido substituidos por nacionalistas. Entre los nuevos nombramientos los más significativos eran los del general Edelmiro Farrell como vicepresidente y el de Gustavo Martínez Zuviría, el notorio novelista antisemita «Hugo Wast», como ministro de Justicia e Instrucción Pública. El escenario quedó despejado para la revolución nacionalista y la subida de Perón.

Los comentarios de Ysabel Rennie sobre el golpe de estado de junio de 1943, escritos poco después del acontecimiento, eran una visión muy perceptiva del futuro rumbo de la política argentina:

Con la perspectiva del tiempo, este acontecimiento se verá tal como fue: el más importante económica, política y socialmente desde la [revolución de 1890]. Porque este golpe, descargado con rapidez, y sin advertencia previa, señaló el final de una sociedad, una economía y un estilo de vida. Con él se enterró la Argentina que vivía exclusivamente de la carne de buey, la Argentina de la Oligarquía Ilustrada, la Argentina liberal, la partidaria del libre comercio, y las esperanzas, el poder y el predominio de la aristocracia terrateniente.[40]

Con todo, el juicio de Rennie era más apropiado para los meses inmediatamente posteriores al golpe de estado que para éste mismo. Fue en octubre y no en junio cuando ocurrió el cambio político más decisivo antes de la culminación de febrero de 1946, cuando Perón ganó las elecciones como presidente.

Una vez los nacionalistas hubieron obtenido el control total de la junta de Ramírez en octubre de 1943, actuaron rápidamente para consolidarse en el país y en el extranjero. Se negaron a seguir hablando con Estados Unidos de romper las relaciones con el Eje y la respuesta norteamericana fue congelar los activos argentinos depositados en bancos en Estados Unidos. Los nacionalistas reiteraron la neutralidad «activa» y reanudaron la búsqueda de aliados en América Latina. A finales de 1943 Argentina había forjado un considerable mercado de exportación de artículos manufacturados en América Latina que Ramírez procuró consolidar firmando tratados comerciales con varios estados latinoamericanos vecinos. El régimen también empezó a meterse en la política de sus vecinos, en un episodio que de nuevo creó fricciones graves entre Argentina y Estados Unidos, un golpe de estado en Bolivia en diciembre de 1943 llevó al poder un régimen neutralista y pro argentino que durante un tiempo sólo tuvo el reconocimiento diplomático de Buenos Aires.

En el plano interior, el régimen dejó de fingir que no tardaría en convocar elecciones. A causa de ello, empezó a encontrar creciente oposición capitaneada por los radicales. El régimen respondió con una mezcla de proclamaciones de estilo nacionalista, represión, populismo incipiente y una creciente oleada de propaganda. Impuso una reducción del 20 por ciento de los arriendos agrícolas y una congelación de los alquileres urbanos. Los tranvías de Buenos Aires, cuya empresa más importante era la Anglo Argentine Tramway Company, fueron obligados a reducir el precio de los billetes y se abolió la odiada Corporación de Transportes. El régimen nacionalizó la Primitiva Gas Company, que era de propiedad británica. También intensificó la campaña contra la corrupción y llevó a cabo una nueva oleada de purgas. Puso las provincias bajo interventores militares y amplió la censura de prensa. A finales de 1944 abolió todos los partidos políticos porque, según afirmó, no representaban realmente la «auténtica opinión pública». Mientras tanto miembros del gobierno pronunciaron numerosos discursos repletos de consignas nacionalistas como «Honradez, Justicia, Deber», el propio Ramírez alabó en particular a la población trabajadora rural, que «no estaba contaminada —como dijo— por las ideas exóticas de las ciudades».

Martínez Zuviría comenzó su mandato como ministro de Justicia con un discurso en el que instó a tomar medidas para «cristianizar el país... Deberíamos incrementar la tasa de natalidad y no la inmigración, debemos asegurar que el trabajo reciba la parte justa de las recompensas y poner a todas las familias bajo un techo decente, tenemos que extir

40. Ysabel Rennie, *The Argentine Republic*, Nueva York, 1945, p. 344.

par las doctrinas basadas en los odios de clase y el ateísmo».[41] Con gran aprobación por parte de la Iglesia, Martínez Zuviría volvió a imponer la enseñanza religiosa en las escuelas por primera vez en sesenta años y luego dirigió una búsqueda de «comunistas» en las universidades, cerrándolas cuando los estudiantes respondían con huelgas. También se adoptaron medidas antisemitas. Aunque los rumores de que el gobierno había creado campos de concentración en la Patagonia resultaron falsos, suprimió varias organizaciones de beneficiencia judías, despidió a algunos maestros judíos y canceló la ciudadanía de algunos judíos naturalizados. La prensa nacionalista llevó a cabo una larga campaña contra Bemberg, el magnate de la cerveza. En abril de 1944 el gobierno se hizo con el control del comercio de exportación de cereales y nacionalizó los elevadores y almacenes de cereales, medidas que algunos consideraron antisemitas porque iban dirigidas contra las casas exportadoras llamadas las Cuatro Grandes. Finalmente, hubo otra racha de ataques contra los comunistas, esta vez entre los sindicatos. Inmediatamente después de hacerse con el poder en junio de 1943, el gobierno había disuelto una facción de la CGT dirigida por los comunistas que había conseguido escindir la federación en marzo de aquel año. En ese momento también acabó con la FONC, los sindicatos de obreros de la construcción, que estaban dominados por los comunistas. A finales de 1943 hubo huelgas de los trabajadores de las empresas cárnicas en Buenos Aires y el gobierno las denunció diciendo que eran instigadas por los comunistas al tiempo que procedía a practicar detenciones en masa. Varios sindicatos, entre ellos las organizaciones de ferroviarios, ya habían sido puestos bajo el control del gobierno por medio del mecanismo de la intervención.

Gran parte de este comportamiento del gobierno manifestaba la cara negativa y puramente reaccionaria del nacionalismo, su exótica mezcla de prejuicios contra el «liberalismo», el «capitalismo» y el «comunismo», su costumbre de romantizar la ruralidad, sus ciegas antipatías contra lo «extranjero» y sus amenazadores impulsos antisemitas. A pesar de ello, el nacionalismo conservaba su compromiso con la «justicia social», cuyo propósito era reconstruir la comunidad nacional orgánica. Esta otra cara del movimiento también se dejó ver cuando aún no había transcurrido un mes desde la revolución de palacio de octubre de 1943 y se procedió al nombramiento, el 28 de octubre, del coronel Juan Domingo Perón como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Los allegados al régimen reconocieron de inmediato la gran importancia de su nombramiento. Perón, según dijo *Cabildo*, que ahora era el principal diario nacionalista, daría «peso y eficiencia a los problemas laborales», porque conocía las «verdaderas necesidades de las organizaciones obreras», y apoyaría la unidad del movimiento sindical, «tratando siempre de evitar y resolver [*sic*] los conflictos». La tarea de Perón era la «organización de los sindicatos».[42]

Aunque todavía no formaba parte del gabinete, y no era nada conocido del público, Perón apareció así en las primeras filas del régimen nacionalista. Había sido uno de los fundadores y líderes del GOU, participando activamente en la «tarea de unificación» en el ejército, en la conspiración contra Castillo, como partidario de Ramírez contra Rawson en junio y más recientemente como una de las figuras principales en la lucha entre los liberales y los nacionalistas. De la carrera anterior de Perón, que desde la adolescencia había pasado en el ejército, el rasgo más sobresaliente era su larga experiencia en la política militar. Inmediatamente antes de la revolución de 1930 Perón había interpretado

41 *Cabildo*, 15 de noviembre de 1943, 1 de enero de 1944, 2 de noviembre de 1943.
42 *Ibíd.*, 28 de octubre de 1943, 30 de octubre de 1943.

un papel secundario como intermediario entre las facciones de Uriburu y Justo, aunque había evitado que se le identificara con una u otra. Inmediatamente antes y después de que estallara la guerra en 1939 había estado en misión oficial en varios países europeos y se había familiarizado con los regímenes de Mussolini y Franco además de ser testigo de la caída de Francia. Perón gozaba de cierto prestigio en el ejército por su talento de organizador y por sus ideas sobre el papel del ejército en la sociedad moderna. Sus opiniones al respecto eran típicas de los nacionalistas. A diferencia de los liberales, que veían al ejército en un papel negativo de vigilante y simple apéndice del estado, Perón y los nacionalistas lo consideraban el epicentro mismo de la comunidad nacional, el encargado de dirigir y movilizar la sociedad. Como miembro del GOU Perón había evitado las toscas diatribas antisemitas y xenófobas de los demás oficiales, pero se había distinguido como anticomunista extremo, temeroso de las intrigas comunistas para formar un frente popular y, sobre todo, temeroso de la influencia comunista en los sindicatos. La intervención de Perón en los asuntos laborales precedió a su nombramiento como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Había buscado activamente contactos en los sindicatos desde el golpe de estado de junio, sobre todo en la «intervenida» Unión Ferroviaria, que ahora era administrada por su íntimo colaborador y amigo personal el coronel Domingo Mercante.

A finales de 1943 los diversos subtemas de la «justicia social» habían pasado a ser objeto de debates casi diarios en los círculos derechistas, católicos y nacionalistas de Argentina. Durante varios años la Alianza Libertadora Argentina había conceptualizado la justicia social como un sistema de sindicatos controlados por el estado. Después del golpe de junio de 1943, al tiempo que de manera típica exigía medidas contra los «comunistas» y los «judíos», la Alianza instaba a formar un «estado protector de la clase obrera argentina».[43] En 1943 la prestigiosa *Revista de Economía Argentina* prestó mucha atención al Plan Beveridge que acababa de hacerse público en Gran Bretaña y juzgaba que la formación de un «estado benefactor» era la mejor manera de evitar una revolución comunista. Otros nacionalistas percibían la clase obrera bajo su control y tutelaje como el instrumento que los llevaría al poder: «La conquista del estado empieza por la conquista de la multitud», había declarado Marcelo Sánchez Sorondo en mayo de 1943.[44] La mayoría de estas ideas sobre la movilización de las masas y el tutelaje de la clase obrera surgieron del fascismo europeo. Pero los nacionalistas que buscaban inspiración externa para crear sus programas y estrategias ya no tenían que concentrarse en el régimen fascista de Italia, que se estaba desmoronando rápidamente, sino que ahora había un modelo mucho más cercano en el Brasil de Getulio Vargas. «Vargas ha dado un impulso extraordinario a los derechos de los obreros en Brasil. Empezó esta actividad con la creación del ministerio de Trabajo ... La manera en que se ocupan de esta cuestión en Brasil ... nos invita a considerar esto como base para el estudio y las ideas».[45]

Así pues, la entrada de Perón en el Departamento Nacional del Trabajo en octubre de 1943 podría verse como la ejecución de una estrategia nacionalista que venía de mucho antes y que Perón adoptó con pleno conocimiento y apoyo de sus colegas de la junta militar. Hizo varias declaraciones muy explícitas sobre sus intenciones y objetivos, la primera en una entrevista con un periodista chileno, Abel Valdés, transcurridas apenas dos

43. *La Razón*, 8 de junio de 1943.
44. Sánchez Sorondo, *La revolución que anunciamos*, p. 246.
45. *La Razón*, 8 de junio de 1943.

semanas desde que tomara posesión de su cargo. A lo largo de toda esta entrevista Perón hizo referencias constantes a conceptos nacionalistas relacionados con asuntos obreros y también empleó el fraseo y el vocabulario clásicos de los nacionalistas.

> Nuestra revolución es esencialmente espiritualista. En Argentina la riqueza del pueblo [debería permanecer] en nuestras manos, de manera que cada argentino pueda percibir el mejor rendimiento de sus esfuerzos. Yo mismo soy sindicalista y como tal soy anticomunista, pero también creo que el trabajo debería organizarse en forma de sindicatos, para que los propios trabajadores, y no los agitadores que los controlan, sean los que cosechen los beneficios de sus esfuerzos.

Su objetivo, según declaró Perón, era

> mejorar el nivel de vida de los trabajadores, pero sin tolerar el conflicto social... No daré carta blanca a los agentes de la destrucción y la agitación, que con frecuencia ni siquiera son argentinos, sino extranjeros. Tengo los asuntos obreros totalmente controlados, y no por la fuerza sino por la conciliación... No crea usted que somos anticapitalistas. Nada de eso. [Pero] el capitalismo internacional está muy equivocado si cree que puede vencer al espíritu nacional de Argentina que este gobierno encarna.[46]

Así pues, según Perón, los nacionalistas trataban de llevar a cabo una revolución espiritualista: la palabra, tomada en préstamo del conservadurismo español, era una de las más comunes del léxico del nacionalismo. La revolución nacionalista significaba mantener la riqueza nacional en el país y dar al trabajo la parte que le correspondía; el propósito de la organización sindical era tener a los «agitadores» a raya y mejorar los niveles de vida sin provocar conflictos de clase. Los comentarios de Perón sobre el «capitalismo internacional» también eran ecos de los nacionalistas, y sus insinuaciones en el sentido de que el capitalismo debía hacer concesiones para impedir que el trabajo se volviera revolucionario parafraseaban las grandes encíclicas pontificias *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno*. De nuevo había evitado Perón comentarios antisemitas explícitos, pero sus críticas simultáneas contra el comunismo y el «capitalismo internacional» adoptaban las suposiciones generales y la perspectiva en que se basaba el antisemitismo en Argentina.

La entrevista con Valdés fue la primera vez que Perón se presentó al público en general. Su aire era de confianza en sí mismo, su actuación fue atractiva y empujó al propio Valdés a hacer una predicción memorable: «Mi impresión general es que el actual gobierno argentino está unido, poderoso y fuerte... Otra de mis impresiones es que ... el coronel Juan Perón puede convertirse muy pronto en el caudillo máximo de la República Argentina, y quién sabe durante cuánto tiempo».[47] Poco después, en una carta abierta dirigida a Ramírez, Perón negó modestamente que aspirase a algo más que al puesto que ocupaba en ese momento, pero era claro a ojos de todo el mundo que estaba cobrando rápidamente ímpetu personal y estatura política.

A finales de noviembre, en un decreto que firmó la totalidad de los ocho miembros del gabinete, el gobierno substituyó el Departamento Nacional del Trabajo por la Secre

46. *Cabildo*, 11 de noviembre de 1943.
47. *Ibíd.*, 11 de noviembre de 1943.

taría de Trabajo y Bienestar Social, con lo que Perón, su jefe, pasó a formar parte del gabinete. En un largo preámbulo del decreto Perón esbozaba de manera todavía más explícita sus planes relacionados con el trabajo. El preámbulo decía que la Secretaría de Trabajo serviría como «organización que centralice y controle», para producir «mayor armonía entre las fuerzas productivas, reforzar la unidad nacional mediante un grado mayor de justicia social y distributiva... concebida de manera cristiana a la luz de las grandes encíclicas».

Al hablar con un grupo de obreros unos cuantos días después, Perón declaró «Soy un soldado en el gremio más poderoso de todos, el militar. Y, por tanto, os aconsejo que para conseguir la misma cohesión y fuerza que tenemos nosotros, permanezcáis siempre unidos».[48]

Mientras Perón explicaba sus intenciones para con los sindicatos, había algunas señales indudables de que el trabajo estaba dispuesto a colaborar. En diciembre de 1943 la Secretaría de Trabajo llegó a un acuerdo sobre salarios y beneficios marginales con la Unión Ferroviaria que equivalía a conceder al sindicato virtualmente todo lo que había exigido pero se le había negado de manera continua desde 1929. Poco después, los líderes sindicales encabezados por el secretario de la CGT, José Domenech, saludaron a Perón como «Trabajador Número Uno de Argentina». Perón terminó el año haciendo un llamamiento público a los hombres de negocios para que pagasen voluntariamente a sus trabajadores un aguinaldo navideño consistente en una mensualidad extra. La campaña destinada a fomentar la «justicia social» continuó hasta bien entrado el año 1944. Perón destacó aún más al dirigir las operaciones de socorro después de que un terremoto devastador arrasara la ciudad de San Juan. También en este momento empezó Perón lo que pronto sería su notoria relación con la actriz Eva Duarte, que formaba parte de un grupo de artistas populares que participó en la campaña para socorrer a San Juan.

Poco después del desastre de San Juan, sin embargo, una nueva crisis en los asuntos exteriores eclipsó de repente las actividades de Perón entre los sindicatos. A raíz del asunto de la carta de Storni Estados Unidos había intensificado su boicot económico y reanudado su campaña propagandística contra Argentina, después de que ambos fueran suspendidos brevemente desde el derrocamiento de Castillo. La campaña alcanzó su apogeo en diciembre de 1943 tras el golpe de estado en Bolivia, en medio de noticias que afirmaban que Argentina estaba envuelta en una conspiración parecida para derribar al gobierno de Uruguay. El régimen nacionalista redobló ahora sus esfuerzos por crear una industria armamentista, pero en un intento desesperado de aliviar sus debilidades militares inmediatas empezó a tramar la compra de armas a la Alemania nazi. Esta medida resultó un error desastroso, toda vez que Osmar Hellmuth, el agente secreto de Ramírez, fue detenido por los ingleses en Trinidad cuando iba camino de España y Alemania y los ingleses pasaron información sobre sus actividades al Departamento de Estado. El caso Hellmuth proporcionó finalmente a Estados Unidos lo que parecía una prueba concreta de la colusión de Argentina con el Eje y armado con esta prueba, el Departamento de Estado amenazó inmediatamente con hacer a pública, colocando así a Ramírez en una posición insostenible. Ramírez no tardó en rendirse y el 26 de enero decretó la ruptura de relaciones diplomáticas que Estados Unidos venía exigiendo inútilmente desde 1942.

Excepto para el puñado de personas que conocían los detalles del caso Hellmuth y sus consecuencias, la ruptura diplomática carecía de toda explicación racional y parecía una

48. *Ibid.*, 30 de noviembre de 1943; *La Razón*, 10 de diciembre de 1943.

capitulación incomprensible ante las presiones norteamericanas. La ruptura de relaciones, por tanto, precipitó inmediatamente una crisis política que llegó a un punto culminante en la segunda semana de febrero, cuando el gobierno trató de acallar la creciente avalancha de críticas de los nacionalistas disolviendo y prohibiendo de pronto todas las asociaciones nacionalistas. Después de la prohibición hubo una racha de dimisiones en el gabinete, entre ellas la del coronel Alberto Gilbert, que, como ministro de Relaciones Exteriores, se convirtió en el chivo expiatorio directo de la misión de Hellmuth, y la de Martínez Zuviría, que dejó el gobierno en señal de protesta tanto por la ruptura de relaciones diplomáticas como por la proscripción de los nacionalistas. Pero luego los nacionalistas contraatacaron y el propio Ramírez fue depuesto el 25 de febrero por sus críticos, que le obligaron a dejar la presidencia, primero temporalmente y poco después de manera permanente. El caso Hellmuth había provocado así la caída de Ramírez y otros, pero el régimen nacionalista en conjunto no resultó afectado, como demostró el hecho de que Estados Unidos se negara a reconocer diplomáticamente al nuevo gobierno. El episodio fue otra etapa importantísima de la subida de Perón. Al substituir a Ramírez en la presidencia, el vicepresidente Farrell renunció al cargo que había ostentado hasta entonces, el de ministro de la Guerra, que fue para Perón, primero de forma provisional pero poco después permanentemente. Gracias a la caída de Ramírez, Perón controlaba ahora dos puestos del gabinete.

Bajo Farrell, Argentina siguió distanciada de Estados Unidos y, aunque continuaron los envíos de carne a Gran Bretaña, Washington mantuvo un bloqueo virtual de los suministros a Argentina. El régimen replicó a su aislamiento forzoso con una inmensa movilización militar de hombres y recursos. A finales de 1945 había triplicado los efectivos del ejército al tiempo que incrementaba la participación militar en el gasto público del 17 por ciento en 1943 al 43 por ciento en 1945. Al crecer el ejército, se empleó el personal militar en la construcción de carreteras, se formaron nuevas plantas experimentales bajo el control y la supervisión del ejército, el ejército dirigió la búsqueda afanosa de materias primas industriales en la región andina. En abril de 1944 el gobierno creó un Banco Industrial que se encargaría de financiar las industrias que se considerasen de interés nacional, lo cual significaba principalmente las compañías estatales dedicadas a producir armamentos. La rápida militarización en 1944, que empezó sobre todo como respuesta a las presiones norteamericanas, se convirtió así rápidamente en un instrumento de la política económica, un medio de encauzar los recursos hacia la industrialización. La militarización se correspondía con los principios fundamentales del nacionalismo, que consideraba al ejército un instrumento para reestructurar la sociedad. Pero ahora se estaba formando una estructura visiblemente autoritaria. Al ampliar las fuerzas armadas, el gobierno impuso todavía más restricciones a la prensa y en abril de 1944 aplicó una prohibición de cinco días a *La Prensa*. A finales de julio Farrell ofició en una gran concentración con antorchas en la Avenida Nueve de Julio de Buenos Aires. Ante un público que se calcula en un cuarto de millón de personas dio a conocer una «Declaración de Soberanía»:

> Hoy ... todo el pueblo de la República ... ha comprendido las verdades fundamentales del nacionalismo ... [Esta manifestación] revela la existencia de una poderosa fuerza nacional que va en pos de objetivos que son puramente nacionales y que, por tanto, no puede ser un partido político, porque no defiende los intereses de ninguna «parte» contra otra parte cualquiera, sino la grandeza de toda la nación.[49]

49. *Cabildo*, 12 de enero de 1944.

El gobierno promulgó edictos aún más nacionalistas, entre ellos un «estatuto del peón» que fijaba salarios mínimos para los trabajadores rurales y era así ejemplo de la vieja preocupación de los nacionalistas por la población rural. A mediados de octubre Farrell presidió una ceremonia que «consagró» simbólicamente las fuerzas armadas a «la Virgen», acto cuyo propósito era evocar la «unión de la Cruz y la Espada» que constituía la visión nacionalista de la conquista de America por los españoles.

De este modo, a pesar de la confusión del caso Hellmuth, el régimen nacionalista continuó cobrando ímpetu y adquiriendo un carácter cada vez más agresivo. Tras la caída de Ramírez, Perón reanudó sus actividades en la Secretaría de Trabajo y se ocupó de eliminar a los adversarios en los sindicatos, principalmente socialistas. En junio, después de eliminar a su líder, Francisco Pérez Leiros, se había hecho con el control del gran sindicato de obreros metalúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica. Aparecieron ahora señales inconfundibles de que había empezado a movilizar a una inmensa base popular. En marzo de 1944 gran número de ferroviarios se manifestaron a su favor. Por primera vez en la historia la CGT participó en el desfile anual del 25 de mayo que conmemoraba la revolución de mayo de 1810. Durante todo este período Perón permaneció en constante comunicación con los líderes sindicales, prometiendo, exhortando y si hacía falta amenazándoles. Su mensaje seguía siendo el mismo que a finales de 1943: instaba a la unidad y promulgaba constantemente el clásico precepto católico de la «justicia social»:

> la nueva política social ... se basa en la necesidad ... de evitar una situación en que algunos hombres sean demasiado ricos y otros demasiado pobres. La sabiduría del *«in medio veritas»* continúa siendo válida ... La verdad se encuentra en el punto medio, en que se mantenga el debido equilibrio en el reparto de la riqueza con el fin de eliminar la absurda polarización ... entre la clase de los ricos y poderosos y la clase de los mendigos ... un sano equilibrio ... comprensión y conciliación entre las clases ... En su discurso ... Perón mencionó todos los puntos que comprenden el concepto cristiano de la justicia social que contienen las grandes encíclicas pontificias.[50]

Desde su otro puesto, el de ministro de la Guerra, Perón supervisó activamente la expansión del ejército al tiempo que incrementaba su poder y su prestigio en el seno del mismo. Como ministro controlaba las comunicaciones entre el gobierno y los militares, y aprovechaba plenamente su poder sobre los suministros, el patronazgo y los ascensos en un momento en que el presupuesto militar crecía a ritmo acelerado. Perón aparecía como el ideólogo más destacado de la proposición nacionalista de que el papel del ejército era dirigir la política pública y construir una sociedad nueva. El 11 de junio de 1944 pronunció su discurso más impresionante hasta la fecha, en el cual presentó su concepto de la «nación en armas». Perón declaró que la guerra era una consecuencia inevitable de la condición humana. Pero el mejor medio de evitarla que tenía cada nación consistía en hacerse militarmente fuerte, y la fuerza militar requería la movilización de todos los recursos disponibles; a su vez, movilización significaba industrialización y «justicia social». «Si vis pacem, para bellum»—proclamó. «Si deseas la paz, prepárate para la guerra».[51]

En Estados Unidos el discurso de Perón fue atacado por «totalitario» y provocó un

50. *Ibíd.*, 25 de junio de 1944.
51. *La Prensa*, 11 de junio de 1944.

nuevo enfriamiento de las relaciones. A partir de entonces, el Departamento de Estado utilizaría con frecuencia la palabra «nazi» para referirse al régimen argentino. Pero en Argentina misma el discurso favoreció la posición política de Perón. Miles de sindicalistas respondieron con manifestaciones populares a los ataques norteamericanos contra Perón. Aprovechando su creciente estatura, menos de un mes después del discurso Perón provocó un conflicto sobre las esferas de autoridad con el general Luis Perlinger, que, como ministro del Interior, se había convertido en su rival principal en la junta. En este conflicto Perón demostró ser irresistible y logró que el resto del gobierno secundara su exigencia de que Perlinger dimitiese. Cuando así hizo Perlinger, Perón adquirió un tercer cargo, la vicepresidencia, que había estado vacante desde la caída de Ramírez en febrero.

En apenas un año a partir del golpe de estado de junio de 1943 contra Castillo, Perón se había convertido de manera indiscutible en la figura principal del régimen militar. Farrell se replegó y a partir de entonces su papel fue el de figura decorativa como presidente. A mediados de 1944 a Perón ya sólo le quedaban dos adversarios: el Departamento de Estado norteamericano y una masa amorfa pero numerosa de oponentes en el país, encabezados por los radicales y las fuerzas vivas, beneficiarias de la vieja economía liberal que se veía amenazada por la política de industrialización y reforma social dirigidas por el estado. Durante el resto de 1944 el Departamento de Estado norteamericano mostró poco interés por Argentina. Las sanciones económicas permanecieron vigentes, pero Estados Unidos resultó incapaz de tomar nuevas medidas contra Argentina, principalmente debido a la oposición británica. A finales de 1944 la oposición interior a Perón iba en aumento, pero seguía siendo extremadamente desunida y difusa. La liberación de París en agosto provocó grandes manifestaciones callejeras en Buenos Aires que se convirtieron en estallidos de cólera contra el régimen por sus «simpatías nazis». Los portavoces de los partidos políticos, que seguían prohibidos, exigían de vez en cuando que se convocaran elecciones, y el «estatuto del peón» provocó una oleada de críticas de las asociaciones de estancieros y agricultores capitaneadas por la Sociedad Rural Argentina. A finales de año Perón se vio envuelto en una enconada disputa con la Unión Industrial Argentina, la principal organización de patronos industriales, al instituir una paga extra obligatoria de fin de año para los obreros, el «aguinaldo», que el año anterior había sido puramente voluntaria. Pero la naturaleza de la política argentina se estaba transformando rápidamente: cada vez que los adversarios de Perón, en el país y en el extranjero, arremetían contra él, sus partidarios sindicales y obreros respondían inmediatamente apoyándole.

Al formar su alianza popular, Perón se benefició de varias circunstancias que contribuyeron a que el mundo del trabajo fuese receptivo a su llamada. En primer lugar, era inevitable que una política de industrialización que incrementaba el empleo urbano resultara popular entre una clase obrera que crecía con rapidez. En segundo lugar, aunque entre 1941 y 1944 el número total de *obreros* afiliados a sindicatos de la CGT aumentó con relativa lentitud de 441.000 a 528.000, es decir, en un 17,7 por ciento, el número de *sindicatos* afiliados a la CGT durante el mismo período aumentó de 356 a 969, lo que equivale a un 285 por ciento, tendencia que ilustraba la propagación del sindicalismo en los nuevos sectores de manufacturación en pequeña escala. A resultas de ello, al empezar a funcionar, la Secretaría de Trabajo tenía una masa de contactos en potencia a los que podía vincularse en toda la población activa. Sin embargo, a los patronos, ante un mercado de trabajo favorable al vendedor y separados unos de otros por enormes diferencias de escala, les resultaba difícil unirse para oponer resistencia en común a los sin-

dicatos con Perón. En tercer lugar, a diferencia del período 1914-1919, en el que se registró un descenso vertiginoso de los salarios reales, en los años 1939-1945 hubo un lento incremento de los salarios reales, principalmente debido a la creación de nuevos puestos de trabajo industriales y a la abundancia de cereales baratos. En 1940 los salarios reales medios estaban más o menos en el mismo nivel que en 1929 y crecieron en un 10 por ciento antes de 1944. Las huelgas fueron mucho menos frecuentes durante los primeros años cuarenta en comparación con veinticinco años antes. Entre 1940 y 1944 la incidencia de huelgas, medida por horas-hombre perdidas, fue de sólo un tercio de la de 1915-1919, aunque la población activa más o menos se había doblado entre los dos períodos. Así pues, durante la segunda guerra mundial no solo se mostró el trabajo menos militante que veinticinco años antes, sino que los sindicatos tendieron a preocuparse menos por los salarios que por beneficios marginales como el subsidio de enfermedad, las pagas extras, las vacaciones pagadas y la compensación por accidente.

Los beneficios marginales eran más fáciles de dar que los incrementos salariales y eran exactamente el tipo de recompensas que la Secretaría de Trabajo podía gestionar. Asimismo, resultaba mucho más fácil tratar con el trabajo cuando el asunto principal se refería a mejoras relativamente superficiales de condiciones que ya eran bastante aceptables, en lugar de la supervivencia de obreros desesperados, a menudo al borde de la rebelión, como sucedía veinticinco años antes. Las técnicas básicas que empleaba Perón eran hacer cumplir la legislación laboral que ya existía, apoyar los aumentos salariales en sectores donde los sindicatos ya estaban organizados y promover sindicatos nuevos donde no existiera ninguno. Perón obtuvo alguna ventaja de la purga de líderes sindicales comunistas poco después del golpe de junio de 1943. Los comunistas eran los líderes sindicales que probablemente se hubieran resistido a él con mayor tenacidad. Sin embargo, su número seguía siendo escaso y el gobierno exageraba constantemente su influencia. Tampoco era muy seguro el prestigio de los comunistas entre los obreros, ya que durante toda la guerra habían evitado las posturas extremistas que pudieran afectar al esfuerzo bélico. Aunque muchos líderes sindicales en 1943-1945 rehusaron tratar con Perón e intentaron guardar las distancias, las presiones de las bases con frecuencia les obligaron a tratar con la Secretaría de Trabajo. A finales de 1944 la Secretaría había empezado a tratar sólo con los sindicatos que poseyeran *personería gremial*, es decir, personalidad jurídica plena conferida por el gobierno. Pero para adquirir esta personalidad los sindicatos tenían que ser controlados por líderes que Perón considerase aceptables, lo cual quería decir líderes que estuvieran dispuestos a seguir sus órdenes.

En el plano internacional, después de la dimisión de Cordell Hull como secretario de estado en noviembre de 1944, la responsabilidad de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado pasó a Nelson Rockefeller, el nuevo subsecretario. Apoyado por numerosas asociaciones de fabricantes de Estados Unidos que veían Argentina como un gran mercado potencial en la posguerra, Rockefeller trató de obtener mayor cooperación de Argentina haciendo concesiones. Poco después de noviembre Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas, suavizó los embargos comercial y financiero y dio a entender que estaba dispuesto a levantar la prohibición de vender armas a Argentina que había impuesto durante la guerra. Esta diplomacia de nuevo cuño tuvo casi al instante varios resultados positivos. En febrero de 1945 Argentina firmó el Acta de Chapultepec, que prometía la cooperación interamericana en la defensa y el comercio mutuos. Finalmente, a finales de marzo, Argentina declaró la guerra a Alemania y Japón. En ese momento, cuando apenas faltaba un mes para la capitulación de Alemania, la declaración de guerra fue solo

simbólica, pero el gesto sirvió para que Argentina fuera admitida en las Naciones Unidas al tiempo que sugería que estaba dispuesta a que las futuras relaciones con Estados Unidos fuesen muy diferentes. Durante un período fugaz pareció, pues, que las aspiraciones del Plan Pinedo de finales de 1940 acabarían cumpliéndose bajo la junta militar.

Sin embargo, el nuevo trato dispensado a Argentina bajo Rockefeller cesó bruscamente después de mediados de abril, cuando Truman substituyó a Roosevelt en la presidencia y el Departamento de Estado experimentó una reorganización más. Aunque Rockefeller permaneció en su puesto durante un tiempo, el control de la política para con Argentina pasó a Spruille Braden, uno de los principales críticos de la neutralidad argentina durante la contienda así como del gobierno argentino del momento. Al terminar la guerra en Europa, Estados Unidos se libró por fin de las restricciones británicas y, encabezado por Braden, aplicó sus energías a una campaña cuyo objetivo era apartar a Perón y al régimen nacionalista. En mayo Braden fue nombrado embajador en Argentina y en junio ya recorría el país atacando al gobierno y exigiendo elecciones inmediatas, instó a Washington a no prestar más ayuda a Argentina «hasta el momento en que el control militarista nazi de este país haya sido substituido por una democracia constitucional y cooperante [*sic*]».[52]

Mientras tanto, Perón había seguido ampliando y consolidando su alianza con los sindicatos. En su discurso más destacado de este período definió su objetivo como «la revolución pacífica de las masas»:

> Si no llevamos a cabo la Revolución Pacífica, el Pueblo mismo tomará el camino de la Revolución Violenta ... Y la solución de todo el problema es la justicia social para con las masas ... Naturalmente, esta idea no es popular entre los ricos ... Pero ellos son sus propios peores enemigos. Mejor ofrecer el 30 por ciento ahora que dentro de años, o quizá incluso meses, arriesgarse a perder todo lo que tienen, incluidas las orejas.[53]

En efecto, el mensaje no era popular entre los «ricos», y a mediados de 1945 las actividades de Spruille Braden reavivaron rápidamente la oposición a Perón que había permanecido dormida en gran parte durante algunos meses. En junio un «Manifiesto de las Fuerzas Vivas» atacó las reformas sociales del gobierno, pero este documento fue seguido al cabo de muy poco por un contramanifiesto de los sindicatos «en defensa de los beneficios conquistados por medio de la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social».

Finalmente, el 19 de septiembre, después de tres meses de creciente tensión, miles y miles de adversarios de Perón se reunieron en las calles de Buenos Aires en una «Marcha de la Constitución y la Libertad». Cinco días después el general Arturo Rawson, que había sido presidente por un día en junio de 1943, capitaneó un golpe de estado fallido desde Córdoba. A finales de septiembre la marina se pronunció a favor de una vuelta al poder civil. Poco después, el gobierno mismo se dividió entre los adversarios de Perón, encabezados por el general Eduardo Ávalos, y sus partidarios. El 9 de octubre Ávalos consiguió obligar a Perón a dimitir de sus múltiples puestos en el gobierno. Tres días des-

52. Carta de 11 de abril de 1945. Citado en Bryce Wood, *The Dismantling of the Good Neighbor Policy*, Austin, Tex., 1985, p. 96.

53. Citado en Darío Cantón, «El ejército en 1930: El antes y el después», en Haydée Gorostegui de Torres, ed., *Historia integral Argentina*, vol. 7, Buenos Aires, 1970, p. 11.

pués fue encarcelado en la isla de Martín García. Parecía que el «peronismo» se había derrumbado bajo los ataques y que Farrell no tardaría en satisfacer las principales exigencias de los «constitucionalistas» liberales: fijar una fecha para celebrar elecciones al tiempo que cedía el control a un gobierno provisional encabezado por los jueces del tribunal supremo.

Tuvo lugar entonces lo que según sir David Kelly, el embajador británico, fue una «comedia increíble». Con la victoria a su alcance, el movimiento que pretendía acabar con Perón flaqueó. En los días que siguieron a su caída, las discusiones en el seno de la coalición liberal retrasaron los esfuerzos de Juan Álvarez, el presidente del tribunal supremo, por organizar un gobierno provisional. Surgieron otros conflictos entre los líderes de la coalición y el ejército. Aunque éste, capitaneado por Ávalos, había acabado doblegándose ante la presión y sacrificando a Perón, no quiso tomar más medidas que hubieran significado el derrumbamiento y el fin de la revolución de 1943. En el seno del ejército, en parte debido a la preocupación ante futuras represalias pero también porque no quería renunciar a sus nuevos poderes tanto en el gobierno como en la economía, creció rápidamente la resistencia al plan de entregar el gobierno al tribunal supremo. Se llegó a un punto muerto que continuó hasta que los acontecimientos dieron un giro repentino y decisivo cuando el 17 de octubre miles de obreros marcharon hasta el centro de Buenos Aires para exigir la puesta en libertad de Perón. Si el ejército hubiera querido un gobierno nuevo dominado por los liberales, hubiera podido actuar rápidamente para impedir la marcha de los obreros. No sólo permitió la marcha, sino que autorizó a Perón, que dos días antes había regresado a Buenos Aires desde Martín García, después de convencer a sus carceleros de que necesitaba tratamiento médico, a dirigir la palabra desde la Casa Rosada a las inmensas multitudes reunidas en la Plaza de Mayo. Proclamó una «indestructible unión de hermandad entre el pueblo [y] el ejército».[54] Después del 17 de octubre la facción de Ávalos en el gobierno de Farrell dimitió; Perón y sus partidarios volvieron al poder.

Para todos los observadores contemporáneos la marcha de los obreros ocurrió de forma totalmente espontánea. Sin embargo, era obvio que Perón había planeado un acontecimiento de este tipo como parte de su estrategia para la supervivencia política. Al despedirse de su estado mayor el 10 de octubre, instó a tratar de conseguir el apoyo popular. Después de su caída, sus principales colaboradores encabezados por Domingo Mercadante recorrieron los distritos industriales y obreros de la ciudad instando a la acción en su nombre. Muchos obreros ya se habían declarado en huelga el 13 de octubre, después de que numerosos patronos rehusaran cumplir la orden de Perón de que el día 12, el «Día de la Raza», fuera fiesta laboral. Los intentos de los obreros de cruzar el río Riachuelo, que dividía la capital federal de la provincia de Buenos Aires, empezaron el 16 de octubre. La gran marcha del 17 de octubre no debía prácticamente nada a la CGT, cuyos líderes no se reunieron hasta la tarde del día 16 mientras las manifestaciones iban in crescendo. Incluso entonces la CGT votó a favor de apoyar a los obreros por un escaso margen de 21 a 19. Sobre todo el «17 de octubre» pareció ser una demostración de comportamiento arraigado, ya que durante un año y pico los sindicatos y los obreros se habían ido acostumbrando a responder a las amenazas contra Perón con la movilización popular.

54. La traducción literal de esta expresión dice «hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía». Véase Félix Luna, *El '45*, Buenos Aires, 1971, p. 295.

Los acontecimientos de septiembre-octubre de 1945 demostraron hasta qué punto, en sólo dos años, Perón había transformado totalmente la política argentina: había hecho que la pelea de cincuenta años entre los radicales y los conservadores resultara un anacronismo; había empujado a la clase obrera a participar en la política, al tiempo que prácticamente eliminaba los tradicionales partidos obreros, en particular el socialista; había dividido el país entre los partidarios «peronistas» de la «independencia económica» y la «justicia social» y los defensores «antiperonistas» del antiguo orden liberal. En noviembre, aunque continuó resistiéndose a dar paso a un gobierno bajo el tribunal supremo, la junta anunció que se celebrarían elecciones en febrero de 1946. En diciembre de 1945 los adversarios de Perón habían superado finalmente sus diferencias internas y habían formado una Unión Democrática (UD) para concurrir a las elecciones. Los radicales dominaban esta coalición, pero a su lado había una mezcla dispar que incluía restos del conservador Partido Democrático Nacional, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La UD representaba lo más parecido que surgió en Argentina al Frente Popular contra el que se había movilizado el GOU en 1943. Pero la UD carecía del ingrediente principal del Frente Popular: el apoyo de la clase obrera organizada. Detrás de su fachada reformista la coalición subsistía con poco más que el impulso de oponerse a Perón. No obstante, acaudillada por José Tamborini, ex radical con unos antecedentes políticos parecidos a los de Roberto María Ortiz, la UD seguía confiando en obtener una arrolladora victoria electoral.

Para Perón la crisis de septiembre-octubre de 1945 había terminado en un escape casi milagroso del olvido político y, sin embargo, pese al 17 de octubre, no en una victoria definitiva. Ahora se enfrentaba al reto de presentarse con poca organización propia a unas elecciones contra una coalición que comprendía a casi todos los partidos políticos. Tenía el apoyo de los sindicatos de Buenos Aires, pero casi nada más. En menos de cinco meses tenía que formar una coalición nacional. En primer lugar, Perón se aseguró el apoyo del Partido Laborista, nuevo partido obrero respaldado por los sindicatos cuyo modelo era más o menos el Partido Laborista británico. En segundo lugar, después de numerosos fracasos durante 1944 y 1945, Perón logró finalmente ganarse a una minoría considerable de los radicales. Hortensio Quijano, el líder de la facción radical disidente, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, que ahora apoyaba a Perón, se convirtió en su compañero de candidatura y ayudó a proyectar el movimiento a las provincias. Entre los otros desertores radicales que se unieron a Perón a finales de 1945 había varios miembros destacados de la FORJA, junto con algunos nacionalistas conservadores capitaneados por la Alianza Libertadora Nacionalista. En las provincias Perón aumentó sus partidarios atrayendo a unos cuantos caciques políticos de talante conservador que habían probado por última vez el poder bajo Castillo y seguían oponiéndose a toda costa a los radicales. Finalmente, Perón gozaba del apoyo de la Iglesia, ya que se comprometió a conservar la enseñanza religiosa en las escuelas que Martínez Zuriviía había vuelto a introducir en 1943 y recordaba continuamente a la jerarquía eclesiástica que los comunistas formaban parte de la UD. A finales de 1945 el «peronismo» creció así rápidamente más allá de su base en los sindicatos bonaerenses y se convirtió en un movimiento heterogéneo con nuevas fuentes de apoyo en las provincias y la población rural.

A medida que se acercaban las elecciones de febrero, y tras haber empezado muy a la zaga de su adversario Tamborini, Perón iba ganando terreno rápidamente. Entonces, cuando faltaban sólo unos días para los comicios, el Departamento de Estado norteamericano publicó un libro azul titulado «A Blue Book: A Memorandum of the United Sta-

tes Government [a otros gobiernos latinoamericanos] With Respect to the Argentine Situation». Spruille Braden, que ahora era subsecretario de estado, había instigado la preparación y distribución de este documento, cuyo propósito era demostrar «cómo agentes nazis en Argentina ... se habían combinado con grupos totalitarios para crear un estado nazi-fascista».[55] El informe presentaba materiales recogidos por Estados Unidos durante la guerra que trataban de demostrar que miembros de sucesivos gobiernos argentinos y personal militar de alta graduación, entre ellos el mismísimo Perón, habían actuado en colusión con el Eje. Repetía las acusaciones de que Argentina había tolerado o alentado el espionaje y la propaganda alemanes; citaba los discursos pro Eje de líderes militares, tratos entre los gobiernos y empresas alemanas y empréstitos concedidos por bancos alemanes a políticos argentinos.

El «Libro Azul» fue recibido por casi todos los bandos argentinos como una burda treta extranjera cuya intención era influir en las elecciones. Reavivó instantáneamente las simpatías nacionalistas, inutilizó a la UD y dio a Perón un asunto importante para unir al electorado a su alrededor. En una entrevista que le hizo un periodista brasileño Perón dio sarcásticamente las gracias a Braden «por los votos que me ha dado. Si me llevo dos tercios del electorado, un tercio se lo deberé a Braden».[56] En la recta final de las elecciones en la campaña peronista resonaba el grito de «¡Braden o Perón!»: la rendición ante las presiones norteamericanas o un audaz compromiso al lado de Perón con un programa de cambio revolucionario. Al hacerse el recuento de votos, se vio que Perón había ganado el 52,4 por ciento frente al 42,5 por ciento de Tamborini (1,49 millones de votos contra 1,21 millones), con el resto de los votos para los partidos menos importantes. Pero habiendo vencido en once de las quince provincias, incluida la capital federal, Perón obtuvo una mayoría arrolladora en el colegio electoral. Ahora tomaría posesión de la presidencia el 4 de junio de 1946, tercer aniversario del golpe de 1943.

Las elecciones de 1946 demostraron que los bastiones del peronismo estaban en la capital y en dos de las tres provincias principales del litoral, Buenos Aires y Santa Fe. En las tres jurisdicciones sin excepción la alianza peronista obtuvo más del 50 por ciento del voto popular. Dentro del litoral sólo Córdoba cayó en poder de la UD, gracias a una alianza frágil y formada apresuradamente entre los liberales y los conservadores. Los peronistas obtuvieron una mayoría en Mendoza y Tucumán, las principales provincias vinateras y azucareras, en las cuales había gran número de trabajadores rurales y urbanos, y en las provincias más atrasadas del oeste y el norte, donde vivían grandes comunidades de campesinos: Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En las ciudades del este, sobre todo en Buenos Aires, el Partido Laborista obtuvo el voto de casi toda la clase obrera, tanto los trabajadores «nuevos» que se componían de emigrantes empleados en nuevas fábricas y nuevos servicios como el proletariado «viejo» que antes votaba a los socialistas.[57] En la capital y sus principales barrios periféricos empezando por Avellaneda el peronismo apareció así como un movimiento formado en su inmensa mayoría por obreros que obtuvo el apoyo de una pequeña minoría perteneciente a otros sectores. Pero

55. Citado en Wood, *Dismantling of the Good Neighbor Policy*, p. 113.

56. Citado en Enrique Díaz Araujo, *La conspiración del '43*, Buenos Aires, 1971, p. 95.

57. La distinción entre las clases obreras «vieja» y «nueva» y su contribución al apoyo electoral a Perón en 1946 se documenta y debate en Peter H. Smith, «La base social del peronismo», y Gino Germani, «El surgimiento del peronismo: El rol de los obreros y de los migrantes internos», en Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente, eds., *El voto personista: Ensayos de sociología electoral argentina*, Buenos Aires, 1980, pp. 39-164.

en otras partes el apoyo a Perón fue mucho más heterogéneo e incluía a numerosos grupos rurales que a menudo habían apoyado a candidatos conservadores. La facción disidente radical Junta Renovadora que apoyaba a Perón desempeñó un papel importante en las elecciones al llevarse votos de la facción radical ortodoxa (la Unión Cívica Radical).

En 1946 Argentina se embarcó así en la versión revisada y popular de la revolución nacionalista que proponía Perón. Hasta finales de 1940 pocos habían sido los indicios de la inminencia de esta gran transición. Que el cambio tuviera lugar reflejaba en parte el accidente que representó la retirada y la muerte prematura de Ortiz, ya que, de haber vivido éste, los conflictos entre los radicales y los conservadores que debilitaron a Castillo tal vez hubieran sido mucho menos agudos. Sin embargo, el cambio de presidente no bastó para desatar las fuerzas que acabaron con el conservadurismo liberal. Igual importancia para su caída tuvieron la segunda guerra mundial y el fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual proporcionó a los nacionalistas la oportunidad de difundir su visión alternativa del futuro de Argentina.